

45ª REUNION — 14ª SESION DE PRORROGA — NOVIEMBRE 22 y 23 DE 1973

Presidencia del doctor JOSE ANTONIO ALLENDE, vicepresidente 1º del Honorable Senado; del doctor AMERICO ALBERTO GARCIA, vicepresidente 2º del Honorable Senado, y del doctor ALBERTO M. FONROUGE, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales

Secretarios: señor ALDO HERMES CANTONI y escribana pública IRMA S. DE CESARETTI

Prosecretarios: señores RAFAEL ARANCIBIA LABORDA y DELFOR W. CARESSI

SENADORES PRESENTES:

ALLENDE, José Antonio
AVALOS, Pedro Isaac
BARBORA de NASIF, Yamili
BARONI, Danilo Luis
BELENGUER, Emilio
BENI, Juan Carlos E.
BLANCO, Rodolfo E.
BRAVO, Leopoldo
BRITOS, Oraldo Norvel
BRIZUELA, Guillermo Ramón
BRIZUELA, Hugo Genaro
CACERES, Rubén Osvaldo
CAMPORA, Pedro L.
CANTONI, Apolo
CARNEVALE, Luis
CARO, J. Armando
CERRO, Francisco Eduardo
CORNEJO LINARES, Juan Carlos
D'AGOSTINO, Lucio Roque
DE LA RÚA, Fernando
DÍAZ BIALET, Alejandro
ELÍAS, Florencio
ESPERANZA, Joaquín Horacio
EVANS, Carlos H.
FONROUGE, Alberto M.
FRANCO, Carlos A.
FROIS, Domingo Andrés
FRUGOLI, Amadeo Ricardo
GARCIA, Américo Alberto
GARCIA, Justino
GRUBISICH, Pablo Eliseo
HERRERA, José Jorge
JAUREGUI, Rafael Zenón
LEÓN, Luis A.
LORENZO, Jorge Luis
LORENZO, Ramón

LOSADA, Mario
LUDER, Ítalo A.
LUNA, Pedro Antonio
MANCINI, Omar A.
MARTIARENA, José H.
MARTINEZ, Julio César
MINICHELLI de COSTANZO, Martha S.
MOREIRA, Miguel Orlando
MORENO, Ramón Enrique
MURGUIA, Edgardo P. V.
NAPOLI, Antonio Oscar
PAZ, Eduardo Alberto
PENNISI, Afrio
PERETTE, Carlos H.
PERONI, Carmelo
POSE, Jorge Juan
PUGLIESE, Juan Carlos
RODRÍGUEZ, Ginés Froilán
ROMERO, Humberto Antonio
SAADI, Vicente Leónides
SALAS CORREA, Luis I.
SALMORAGHI, José César
SAPAG, Elias
VAL, Buenaventura Justo
VALLE de GONZALEZ, Leni Rosa
VIVAS, Angel Juan Gregorio
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, CON AVISO:

CHAILE, Juan Carlos
HERRERA, Dermidio Fernando L.
MAYA, Héctor Domingo
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito

AUSENTES, CON LICENCIA:

ANGELOZ, Eduardo César
MUNIAGURRIA, Camilo

senadores sobre **incorporación de representantes provinciales en la administración de YPF.** Se aprueba. (Pág. 2348.)

21.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de ley del señor senador Belenguer por el que se crea una escuela profesional de mujeres en la provincia de Río Negro.** Se aprueba. (Pág. 2351.)

22.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Educación en el proyecto de declaración del señor senador Murguía por el que se solicita al Poder Ejecutivo la institucionalización del Festival austral del folklore.** Se aprueba. (Pág. 2353.)

23.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre reducción de las comisiones que perciben los intermediarios en operaciones comerciales.** Se aprueba. (Pág. 2356.)

24.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley de los señores senadores Díaz Biale y Frois sobre penalidades a evasores de impuestos.** Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2361.)

25.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley de los señores senadores Díaz Biale y Frois sobre delitos contra el régimen de inversiones extranjeras.** Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2385.)

26.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley del señor senador Angeloz y otros señores senadores sobre modificaciones a la ley 11.544 (jornada de trabajo).** Se aprueba con modificaciones. (Pág. 2390.)

27.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley del señor senador Salas Correa sobre prescripción de acciones relativas a créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo.** Se aprueba. (Pág. 2394.)

28.—**Consideración del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley del señor senador Cerro sobre actualización del monto de créditos laborales demandados judicialmente.** Se aprueba con modificaciones. (Página 2398.)

29.—**Apéndice.**

I. — **Sanciones del Honorable Senado.** (Página 2401.)

II. — **Inserción.** (Pág. 2405.)

— En Buenos Aires, a los veintidós días del mes de noviembre de 1973, a la hora 17 y 25, dice el

Sr. Presidente (García, A. A.). — Con la presencia de 37 señores senadores, que constituyen

quórum reglamentario, queda abierta la decimoquarta sesión de prórroga del presente período legislativo.

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (García, A. A.). — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

Sr. Secretario (Cantoni). — (*Leyendo*):

I

Acuerdos

Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando acuerdos. (*A la Comisión de Acuerdos.*)

II

Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados.
— **Proyectos de ley en revisión**

1

Personal del Congreso de la Nación. — Régimen Previsional

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1973.

Señora presidenta del Honorable Senado.

Tengo el honor de dirigirme a la señora presidenta comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Incorporárase obligatoriamente en el régimen previsional instituido por decreto ley 15.943/46 (ratificado por la ley 13.593) y decreto ley 333/58 (ratificado por la ley 14.467) y disposiciones complementarias, al personal que revista en la jurisdicción 02-Congreso de la Nación, del presupuesto general de la administración pública. El personal jubilado o pensionado, o sus derechohabientes, deberán optar, dentro de los 120 días de la promulgación de esta ley, para incorporarse al régimen de la presente.

Art. 2º — Para el otorgamiento al personal en actividad, jubilado o pensionado, de los beneficios previsionales, determinación de aportes y haberes, acreditación de servicios y demás requisitos, serán de aplicación los decretos leyes 19.396/71 y 19.560/72 y sus normas reglamentarias y complementarias, debiendo entenderse, a estos efectos, que el organismo y planta presupuestaria correspondientes son: Congreso de la Nación y jurisdicción 02-Congreso de la Nación, del presupuesto general de la administración pública, respectivamente.

Art. 3º — Podrán incorporarse al régimen de esta ley los agentes que hayan revistado en el Congreso de la Nación y llenen los demás requisitos exigidos por ella.

A los efectos de la presente, se considerarán como cumplidos en el Congreso de la Nación los servicios prestados hasta su sanción y computables en cualquier régimen previsional por los agentes que revistan en dicha jurisdicción y que a partir de 1955 fueron transferidos, declarados cesantes o prescindibles o fueron

en la solución que da este despacho respecto a todas aquellas operaciones vinculadas a inmuebles que revisten interés social.

Los fundamentos del despacho de la comisión son muy claros, así como los expuestos por el señor miembro informante al explicar las razones determinantes de su texto.

Es cierto que una reducción total de las comisiones al uno y medio por ciento, sin distinguir entre inmuebles de interés social y los demás, puede ser observada desde el punto de vista de su incidencia en la actividad económica general. Pero la comisión ha entendido que, con el criterio adoptado en el artículo primero, por la cantidad de operaciones que esa norma comprende y en particular por la solución del artículo tercero, que elimina las comisiones que arbitraria e injustamente cobran los bancos y otras entidades financieras, se satisfacen adecuadamente los objetivos y requerimientos que en el plano económico se procuran mediante la reducción de las comisiones en este tipo de operaciones.

Estas son las razones por las cuales hemos suscripto de conformidad este despacho y le damos nuestro voto favorable.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, sin observación, es igualmente aprobado.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

24

**PENALIDADES A QUIENES CAUSAREN
EVASION DE IMPUESTOS**

Sr. Presidente (García, A. A.). — Corresponde considerar el punto II del mismo orden del día sobre penalidades a quienes intentaren o causaren la evasión de impuestos.

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Cantoni). — (*Leyendo*):

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley de los señores senadores doctor Alejandro Díaz Biale y don Domingo Andrés Frois Regis sobre pena a los contribuyentes, responsables o terceros que intentaren o causaren la evasión de impuestos a cargo de la Dirección General Impositiva; y, por sus fundamentos y los que hará el señor miembro informante, os aconseja su aprobación en la siguiente forma:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Penas y responsables

Artículo 19 — Serán reprimidos con pena de prisión de un mes a cuatro años los responsables por deuda propia o ajena que mediante ocultamiento malicioso o valiéndose de cualquier ardido o engaño, evadan o intenten evadir total o parcialmente, por un monto superior a 250.000 pesos anuales, uno o más tributos a cargo de la Dirección General Impositiva. El límite mínimo establecido en el presente artículo no regirá para quienes reincidieran en el hecho incriminado.

Art. 29 — Los agentes de retención y los de percepción que no ingresen el impuesto retenido o percibido dentro de los treinta (30) días corridos inmediatos siguientes al vencimiento de los plazos establecidos para su ingreso, estarán sujetos a la pena de prisión de uno a seis años.

Art. 39 — La prisión será de uno a seis años cuando para cometer el delito previsto en el artículo 19 se recurra al empleo de figuras societarias simuladas o personas interpuestas, a documentos simulados o falsos para justificar pasivos ficticios o se simule la existencia de inversiones con el objeto de obtener franquicias o desgravaciones impositivas; igual pena corresponderá a quienes, para frustrar en todo o en parte el pago del impuesto evadido, gravaren, inutilizaren, destruyeren, dañaren o de cualquier manera hicieran desaparecer bienes o disminuyeran su valor.

Art. 49 — Será reprimido con pena de prisión de tres a nueve años el que por amenazas de imputar a otro los delitos previstos en la presente ley le obligue a poner a su disposición, o a la de un tercero, cosas, dinero, documentos o cualquier otro bien o destruir o subscribir documentos de obligación o de crédito. La pena aplicable será de cuatro a diez años de prisión si el autor del hecho mencionado en este artículo fuera funcionario público.

Art. 59 — Cuando alguna de las personas referidas en los artículos anteriores fuera un ente de existencia ideal o un incapaz, la pena de prisión se aplicará a los miembros de la misma, directores, administradores, gerentes, mandatarios, gestores o representantes de aquellos que hayan intervenido en la comisión del hecho de que se trate en nombre o beneficio de dicha persona ideal o incapaz o en el suyo propio.

Art. 69 — Las sanciones impuestas por el régimen de la presente ley implicarán la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para el comercio o el desempeño de funciones públicas o de gerencia, dirección o sindicatura de sociedades y para el ejercicio profesional cuando se trate de profesionales universitarios, siempre que éstos, en ejercicio de sus actividades como tales, hubiesen tenido participación en la realización de los hechos penados por esta ley.

Sumario administrativo de prevención

Art. 79 — Cuando en ejercicio de las atribuciones conferidas a la Dirección General Impositiva por la legislación vigente, aquella presumiera la existencia de actos reprimidos por la presente ley, el director general o los funcionarios que éste designe procederá a instruir el pertinente sumario administrativo de prevención, a cuyo efecto queda facultado para:

- a) Citar a las personas de quienes considere procedente recibir declaraciones y a las que deban ser careadas en rueda de personas;
- b) Exigir de los contribuyentes, responsables y terceros la presentación de todos los comprobantes y justificativos que se refieren a los hechos motivos del sumario;
- c) Realizar pericias técnicas por expertos de la Dirección General Impositiva o mediante la colaboración de organismos oficiales en toda clase de libros, papeles, correspondencia, documentos, o referidas a las modalidades operativas de la actividad vinculadas con las personas o entidades sometidas a investigación;
- d) Si en el ejercicio de las atribuciones consignadas en este artículo fuera necesario detener a personas que se nieguen a prestar declaración, practicar allanamientos, secuestros, registros o inspecciones de oficinas, libros, papeles, correspondencia, archivos o documentos de las personas o entidades mencionadas en el inciso b), se solicitarán las órdenes de detención o allanamiento al juez competente, quien resolverá dentro de las veinticuatro horas. Tales órdenes no serán necesarias para los allanamientos y secuestros en edificios y lugares públicos y en negocios, comercios, locales, centros de reunión o recreo y establecimientos industriales, en lugares abiertos al público con excepción de las partes destinadas a habitación o residencia particular;
- e) Cuando se responda verbalmente a los requerimientos previstos en los incisos a) y b), se realicen las diligencias del inciso d) o cualquier otra de comprobación que pueda tener alguna importancia para la causa o se examinen libros, papeles, etcétera, se dejará constancia en actas de la existencia o individualización de los elementos exhibidos, manifestaciones verbales prestadas, resultado de las diligencias practicadas, etcétera. Dichas actas, que extenderán dos funcionarios de la dirección, sean o no firmadas por el interesado, servirán de prueba en el juicio respectivo, al igual

que las pericias a que hace referencia el inciso c);

- f) Solicitar a los organismos y entes estatales y paraestatales, nacionales, provinciales y municipales, las informaciones que faciliten la investigación de los hechos del sumario. La información requerida no podrá denegarse invocando lo dispuesto en las leyes, cartas orgánicas o reglamentaciones que hayan determinado la creación o rijan el funcionamiento de los organismos y entes referidos. Esta atribución y la correlativa obligatoriedad de prestar colaboración regirán también para los funcionarios públicos o instituciones bancarias, oficiales, mixtas o privadas.

Art. 80 — Instruido el sumario administrativo de prevención, el mismo quedará concluido con un informe fundado sobre los hechos investigados, y si de sus conclusiones resultare indicio vehemente o semiplena prueba de aquéllos, el director general o los funcionarios de la repartición que éste designe en cada caso iniciará denuncia o querella ante el juez competente.

Proceso judicial

Art. 90 — El sumario administrativo labrado en las condiciones establecidas en esta ley constituirá la base del proceso judicial y se elevará al juez competente ante quien se formule la denuncia o querella.

Art. 10. — Los procedimientos de determinación tributaria o de aplicación de sanciones fiscales, así como también las resoluciones que en los mismos se dicten con arreglo a la ley 11.683 (texto ordenado en 1968 y sus modificaciones) no constituirán cuestiones prejudiciales a las denuncias o querellas que se inicien por aplicación del artículo 80 ni a las sentencias que recaigan en los procesos establecidos en la presente ley. Cuando el delito imputado sea la evasión fiscal, no se dictará sentencia condenatoria hasta que exista resolución firme en materia fiscal; esta resolución no producirá efecto alguno en sede penal.

Disposiciones complementarias

Art. 11. — Serán competentes para entender en las causas que se promueven por aplicación de esta ley los jueces nacionales de primera instancia en lo Penal Económico de la Capital Federal y los jueces de primera instancia en lo Federal del interior del país, según fuere el domicilio fiscal de los infractores.

Art. 12 — La pena de prisión establecida por esta ley será impuesta sin perjuicio de las sanciones fiscales previstas por la legislación vigente, las que continuarán siendo aplicadas por la Dirección General Impositiva.

Art. 13. — Las disposiciones de la presente ley no serán de aplicación con relación a los gravámenes comprendidos en el título I de la ley de impuestos internos (texto ordenado en 1968 y sus modificaciones).

Art. 14. — Deróganse los párrafos tercero, quinto y sexto del artículo 45 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1968 y sus modificaciones) y modifíquese el párrafo segundo del mismo, suprimiéndose el término «fraudulentamente».

Art. 15. — Las disposiciones generales del Código Penal serán de aplicación a los efectos de esta ley.

Art. 16. — A los efectos de esta ley serán de aplicación las disposiciones del título IX del capítulo XIII del Código Penal.

Art. 17. — La presente ley entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo podrá disponer la prórroga de su entrada en vigencia por un plazo determinado, comunicándolo al Congreso.

Art. 18. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. Conforme al artículo 91 del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente despacho pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 14 de noviembre de 1973.

Alejandro Díaz Bialek. — Luis Carnevale. — Carlos A. Franco. — Domingo Andrés Frois.

Con disidencias parciales:

Carlos H. Perette. — Fernando de la Rúa.

ANTECEDENTE

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Penas y responsables

Artículo 1º — Serán reprimidos con pena de prisión de un mes a cuatro años los contribuyentes, responsables o terceros que por cualquier medio doloso intentaren o causaren la evasión de impuestos cuya fiscalización se encuentre a cargo de la Dirección General Impositiva o le sea atribuida en el futuro, y que por su capacidad contributiva caracterizada por la importancia de su patrimonio y/o giro comercial pudieren substraer o substraieran al erario sumas de considerable magnitud, perturbando al Estado en el cumplimiento de sus fines.

Art. 2º — Los agentes de retención y los de percepción que no ingresen el impuesto retenido o percibido dentro de los treinta (30) días inmediatos siguientes al vencimiento de los plazos establecidos para su ingreso estarán sujetos a la misma pena del artículo anterior. Si esta infracción fuere culposa el máximo de la pena no excederá de tres años.

Art. 3º — Igual pena corresponderá a quienes durante el procedimiento de determinación de oficio establecido en los artículos 23 y siguientes de la ley 11.683 (texto ordenado en 1968 y sus modificaciones), o en las instancias posteriores o después de dictada

sentencia definitiva, gravaren, destruyeren, inutilizaran, dañaren, ocultaren, hicieren desaparecer bienes de su patrimonio o disminuyeren su valor y de esta manera frustraren en todo o parte el cumplimiento de las obligaciones tributarias que correspondan.

Art. 4º — La pena de prisión del artículo 1º será de aplicación no sólo a las personas indicadas en el mismo, sino también a los partícipes mencionados en los artículos 45 y 46 del Código Penal y a quienes incurran en los delitos del capítulo XIII del título XI del libro II de dicho código.

Art. 5º — Será reprimido con pena de prisión de tres a nueve años el que por amenazas de imputar a otro los delitos previstos en la presente ley le obligue a poner a su disposición, o a la de un tercero, cosas, dinero, documentos o cualquier otro bien, o destruir o suscribir documentos de obligación o de crédito. La pena aplicable será de cuatro a diez años de prisión si el autor del hecho mencionado en este artículo fuera funcionario público.

Art. 6º — Cuando alguna de las personas referidas en los artículos anteriores fuera un ente de existencia ideal o un incapaz, la pena de prisión se aplicará a los miembros de la misma, directores, administradores, gerentes, mandatarios, gestores o representantes de aquellos que hayan intervenido en la comisión del hecho de que se trate en nombre o beneficio de dicha persona ideal o incapaz o en el suyo propio.

Art. 7º — Las sanciones impuestas por el régimen de la presente ley implicarán la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena para el comercio o el desempeño de funciones públicas o de gerencia, dirección o sindicatura de sociedades y para el ejercicio profesional cuando se trate de profesionales universitarios, siempre que éstos en ejercicio de sus actividades como tales hubiesen tenido participación en la realización de los hechos penados por esta ley.

Sumario administrativo de prevención

Art. 8º — Cuando en ejercicio de las atribuciones conferidas a la Dirección General Impositiva por la legislación vigente, aquélla presumiera la existencia de actos reprimidos por la presente ley, el director general o los funcionarios que éste designe procederán a instruir el pertinente sumario administrativo de prevención, a cuyo efecto queda facultado para:

- Citar a las personas de quienes considere precedente recibir declaraciones y a las que deban ser careadas en rueda de personas;
- Exigir de los contribuyentes, responsables y terceros la presentación de todos los comprobantes y justificativos que se refieren a los hechos motivo del sumario;
- Realizar pericias técnicas por expertos de la Dirección General Impositiva o mediante la colaboración de organismos oficiales en toda clase de libros, papeles, correspondencia, documentos o referidas a las modalidades operativas de la actividad vinculadas con las personas o entidades sometidas a investigación;
- Si en el ejercicio de las atribuciones consignadas en este artículo fuera necesario detener a personas que se nieguen a prestar declaración, practicar allanamientos, secuestros, registros o inspecciones de oficinas, libros, papeles, correspondencia, archivos o documentos de las personas o entidades mencionadas en el inciso b), el juez competente expedirá las órdenes de detención o allanamiento, dentro de las 24

horas habilitando los días y horas inhábiles que fueren menester. Tales órdenes no serán necesarias para los allanamientos y secuestros en edificios y lugares públicos y en negocios, comercios, locales, centros de reunión o recreo y establecimientos industriales en lugares abiertos al público con excepción de las partes destinadas a habitación o residencia particular;

- e) Cuando se responda verbalmente a los requerimientos previstos en los incisos a) y b), se realicen las diligencias del inciso d) o cualquier otra de comprobación que pueda tener alguna importancia para la causa o se examinen libros, papeles, etcétera, se dejará constancia en actas de la existencia o individualización de los elementos exhibidos, manifestaciones verbales prestadas, resultado de las diligencias practicadas, etcétera. Dichas actas, que extenderán dos funcionarios de la dirección, sean o no firmadas por el interesado, servirán de prueba en el juicio respectivo al igual que las pericias a que hacen referencia en el inciso c);
- f) Solicitar a los organismos y entes estatales y paraestatales, nacionales, provinciales y municipales, las informaciones que faciliten la investigación de los hechos del sumario. La información requerida no podrá denegarse invocando lo dispuesto en las leyes, cartas orgánicas o reglamentaciones que hayan determinado la creación o rijan el funcionamiento de los organismos y entes referidos. Esta atribución y la correlativa obligatoriedad de prestar colaboración regirán también para los funcionarios públicos e instituciones bancarias oficiales, mixtas o privadas.

Art. 9º — Instruido el sumario administrativo, de prevención el mismo quedará concluido con un informe fundado sobre los hechos investigados y si de sus conclusiones resultare indicio vehemente o semiplena prueba de aquéllos, el director general o los funcionarios de la repartición que éste designe en cada caso iniciarán denuncia o querrela ante el juez competente.

Proceso judicial

Art. 10. — El sumario administrativo labrado en las condiciones establecidas en esta ley constituirá la base del proceso judicial y se elevará al juez competente ante quien se formule la denuncia o querrela. El juez dispondrá la ratificación o ampliación de las diligencias realizadas en dicho sumario y las medidas que considere pertinentes para completar la investigación. Cumplidos estos trámites el juez dictará prisión preventiva o el sobreseimiento que corresponda.

Art. 11. — Los procedimientos de determinación tributaria o de aplicación de sanciones fiscales así como también las resoluciones que en los mismos se dicten con arreglo a la ley 11.683 (texto ordenado en 1968 y sus modificaciones), no constituirán cuestiones judiciales a las denuncias o querrelas que se interpongan por la Dirección General Impositiva de acuerdo con el artículo 8º, ni a las sentencias que recaigan en los procesos establecidos en la presente ley.

Disposiciones complementarias

Art. 12. — Serán competentes para entender en las causas que se promuevan por aplicación de esta ley únicamente en lo que atañe en la pena de prisión y accesorios del Código Penal que correspondieren los

jueces nacionales de primera instancia en lo Penal Económico de la Capital Federal y los jueces de Primera Instancia en lo Federal del interior del país, según fuere el domicilio fiscal de los infractores.

Art. 13. — No se aplicarán las sanciones previstas en los artículos 1º, 2º y 4º de esta ley a los contribuyentes, responsables o terceros en caso de que optaren por pagar una multa equivalente al 25 % del impuesto defraudado o intentado defraudar, sin perjuicio de las otras sanciones fiscales que correspondan. De este derecho sólo podrán hacer uso quienes no registren antecedentes de la misma naturaleza.

Art. 14. — La pena de prisión establecida por esta ley será impuesta sin perjuicio de las sanciones fiscales previstas por la legislación vigente, las que continuarán siendo aplicadas por la Dirección General Impositiva.

Art. 15. — Las disposiciones de la presente ley no serán de aplicación con relación a los gravámenes comprendidos en el título I de la ley de impuestos internos (texto ordenado en 1968 y sus modificaciones).

Art. 16. — Deróganse los párrafos tercero, quinto y sexto del artículo 45 de la ley 11.683 (texto ordenado en 1968 y sus modificaciones) y modifíquese el párrafo segundo del mismo suprimiéndose el término «fraudulentamente».

Art. 17. — La presente ley entrará en vigor a los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo podrá disponer la prórroga de su entrada en vigencia por un plazo determinado, comunicándolo al Congreso.

Art. 18. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.

Domingo Frois Regis. — Alejandro Díaz Biale.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La Comisión de Legislación General que ha estudiado en profundidad los problemas vinculados al proyecto en revisión sancionado por la Honorable Cámara de Diputados ha creído conveniente, recogiendo el espíritu que ha primado al buscarse la sanción penal a la «grave» defraudación fiscal, la presentación del proyecto que se acompaña en el que se procura mejorar, dejando incólume ese propósito, las deficiencias observadas en aquel proyecto considerado.

Así se propicia en primer lugar la sanción de una ley especial no incluida en el Código Penal en la idea que la emergencia que impone la necesidad de su sanción no requiere la estabilidad y permanencia propia de aquellos cuerpos legales y concordando así con el criterio sustentado por el Poder Ejecutivo en su proyecto.

En tal inteligencia se ha procurado delimitar exhaustivamente cuáles son los sujetos pasivos de las penalidades haciendo pasibles, únicamente a aquellos contribuyentes que por la gran envergadura de sus negocios, su organización operativa y los medios de asesoramiento con que cuentan son los únicos que pueden producir una «grave» defraudación fiscal. Excluyéndose de tal modo a todos los otros que no revisten esa magnitud y también a las conductas tales como la

simple omisión de impuesto o la mora en su pago. Esto no significa que cuando las circunstancias lo justifiquen o la experiencia en la aplicación de la ley lo señale, no pueda extenderse su régimen a otros contribuyentes mediante la respectiva sanción de una ley ampliatoria.

Otro de los propósitos de este proyecto, concordante con la intención expuesta por el miembro informante de la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto venido en revisión y a consideración de esta comisión, es el de evitar en lo sucesivo continúe produciéndose una inequitativa distribución de la carga tributaria en razón de la evasión percibida en los sectores con mayores posibilidades económicas.

Por otra parte este proyecto resulta complementario de la ley de regularización patrimonial recientemente sancionada y que dará oportunidad a todos aquellos infractores para que antes de la vigencia de la ley penal, puedan solucionar su ilícita situación fiscal. Tendiendo a esto es que en el artículo 16 de este proyecto se autoriza al Poder Ejecutivo a prorrogar la vigencia de la ley a fin de no superponer los plazos de aplicación de ambas.

Esta comisión entiende que con la sanción del proyecto se obtendrá como resultado no sólo la función moralizadora que le es propia a toda ley represiva, sino también contribuirá, evidentemente, al incremento de la recaudación fiscal que contribuirá a aliviar los endémicos déficit fiscales y permitirá en el futuro una más adecuada progresividad de las contribuciones.

En este proyecto se ha optado por reprimir la tentativa de evasión o la evasión de los impuestos nacionales a cargo de la Dirección General Impositiva, con exclusión de todo otro impuesto —incluso los aduaneros, que tienen su propio régimen— y de los impuestos provinciales, incluidos estos últimos en el proyecto en revisión del que nos apartamos, por entender que con respecto a ellos no se justifican sanciones de la índole propiciada por las características de los sistemas tributarios provinciales de liquidación administrativa en su mayoría, y para evitar incursionar en campos de dudosa constitucionalidad.

Se contemplan además sanciones para los agentes de retención y/o de percepción, que si bien se encuentran ya incluidos en el actual ordenamiento jurídico (artículo 45 de la ley 11.683) en mérito a la gravedad que reviste la conducta de quienes utilizan los dineros públicos en su exclusivo beneficio, se ha considerado conveniente modificar la gravedad de las sanciones vigentes, existiendo, además, razones de uniformidad que hacen necesaria su inclusión en esta ley.

Asimismo se contemplan dos figuras que reprimen maniobras que la experiencia ha demostrado como frecuentes y que son de graves consecuencias. Por una parte se sanciona la insolencia provocada por aquellos que de tal modo

pretenden eludir el pago de sus obligaciones fiscales y por otra parte se sanciona a los funcionarios públicos o demás personas que, valiéndose de injustas amenazas con las sanciones que contempla el proyecto, obtienen para sí beneficios de cualquier índole, castigándose de este modo la extorsión que ello significa. Estas dos figuras están también contenidas en el proyecto original del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, contiene el proyecto normas procesales tendientes a facilitar la averiguación y castigo de los delitos contemplados. Para ello se ha pergeñado un sistema de instrucción a cargo del organismo fiscalizador que, con las suficientes garantías de la revisión judicial, podrá hacer uso de su experiencia en la materia, aportando inapreciables elementos técnicos que nuestra organización judicial no cuenta al presente. No obstante todo ello, y teniendo en cuenta la situación de emergencia financiera en que vive el país, se creyó oportuno encarar un mecanismo por medio del cual se permita actuar con máxima prudencia, evitando excesos que pueden producir esta novedosa legislación hasta tanto sus principios adquieran arraigo, permitiendo, por una sola vez, que los infractores puedan redimirse de la pena corporal mediante el pago de una substancial pena pecuniaria, que procederá sin perjuicio de las otras sanciones previstas en la legislación fiscal vigente.

Domingo Frois Regis. — Alejandro Díaz Biale.

Sr. Presidente (García, A. A.). — En consideración en general. Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Díaz Biale. — Señor presidente: la justicia es el principio constitutivo del derecho y, como bien universal, existe para ser realizada. El derecho es tal en tanto y en cuanto realiza la justicia. Por eso se ha dicho que todo derecho es justo, y que derecho y justicia son una misma cosa.

En la clásica definición que de la justicia dierra Aristóteles, y que perfeccionara Santo Tomás de Aquino, existen tres formas de justicia, una, conmutativa, que rige las relaciones contractuales; otra, distributiva, que se refiere al Estado, en cuanto impone las cargas y distribuye los bienes; y otra, legal o general, por la cual cada uno de los ciudadanos está obligado a contribuir con la prestación de sus servicios y con sus aportes al bienestar de la sociedad.

Es oportuno, señor presidente, que yo exprese ahora la grave ruptura que los falsos legisladores de la dictadura militar crearon entre la justicia distributiva y la general. Las cargas no fueron repartidas con justicia; el patrimonio del Estado sufrió el vaciamiento que le impusieron los intereses antinacionales para satisfacer sus propias apetencias, que no eran, por cierto, las del pueblo, y que sin hesitación calificamos de

nefastas. A ello se unió el alza incesante del costo de vida, la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, la eliminación que los monopolios hicieron de la pequeña y de la mediana industria, la privación a los trabajadores de las justas retribuciones y, lo que es más grave, la pérdida de la fe a que la injusticia social llevó al hombre argentino durante estos largos diecisiete años que debió soportar. Y digo estos largos diecisiete años, dejando a salvo que si bien en ese periodo hubo gobiernos constitucionales, la verdad es que ni unos ni otros pudieron realizar sus propias virtualidades, porque lo impedían los intereses antinacionales, y son ellos los que determinaron la caída de los gobiernos por motines y cuartelazos.

Esta es una larga, triste y aleccionadora historia que ha recogido el pueblo argentino, que hoy se siente liberado, bajo el pensamiento rector del conductor de nuestro movimiento, en un plan de realidad nacional y de reconstrucción.

La justicia legal fue quebrada, violada sin retaceos, impunemente, porque el deber de contribuir de los hombres de nuestro pueblo no estaba regido por el bien y la prosperidad de la comunidad nacional, sino por la necesidad de cubrir un déficit cercano a tres billones de pesos y una deuda externa que pasa los 6.000 millones de dólares, irresponsablemente contraída. El pueblo argentino estaba, así, condenado a pagar su propia derrota.

Las obligaciones tributarias impuestas por la dictadura encierran, dramáticamente, una injusticia. Para el derecho tributario se dio el supuesto del derecho injusto. Y si bien es cierto que el bien común puede subsistir a pesar y a costa del bien particular, no es menos cierto que el bien común muere cuando el atentado o la violación se dirige contra todo un pueblo.

Contra tales leyes y conductas se levanta indignada la protesta, y los hombres de nuestro pueblo podrían repetir, ante los dictadores de turno, la clásica respuesta de Antígona al tirano Creón. Y la dio el pueblo argentino en los comienzos de la liberación.

Conforme al criterio de máxima prudencia que aconsejaba tener el Poder Ejecutivo de la Nación, en el proyecto de ley que estamos considerando, castigamos al gran evasor, o sea a aquel que por su capacidad contributiva, caracterizada por la importancia de su patrimonio, o de su giro comercial o industrial, o de cualquier otra naturaleza, pretende eludir o elude, por cualquier medio doloso, el pago de impuestos a cargo de la Dirección General Impositiva.

Como bien lo expresó el señor diputado Díaz Ortiz en el debate realizado en la Honorable Cámara de Diputados, existen situaciones perfectamente diferenciadas: la de los contribuyentes víctimas de un sistema económico —aludía a aquellos pequeños y medianos contribuyentes que por circunstancias ajenas a su voluntad y por razones de fuerza mayor impuestas por la situa-

ción económica tratan de evitar el pago, o lo evitan— y la de ese otro tipo de contribuyente, que calificamos de gran evasor, no sólo por el monto de lo defraudado, sino también por el tipo de maniobras de que se vale para hacerlo.

Existe una gran evasión tributaria y los máximos responsables son las grandes empresas y los grandes capitalistas, que violan el principio jurídico de que a mayor responsabilidad mayor es el deber de cumplimiento.

Nos anticipamos a una posible objeción: que igual sanción deben sufrir quienes cometen iguales actos de defraudación con inferior capacidad contributiva, atendiendo a la misma naturaleza del acto.

Hemos sostenido, señor presidente, que el régimen de la dictadura no respetó la justicia distributiva ni la justicia general; que empobreció al pueblo argentino y le hizo perder la fe, en tal medida que no movía al ciudadano a cumplir con obligaciones que sabía injustas y pertenecientes a un complejo y confuso sistema tributario, aunque, por otra parte, no tenía capacidad económica para cumplir. También hemos sostenido que el pueblo se vio enfrentado a un verdadero estado de necesidad. Ante el dilema de la bolsa o la vida, resolvió salvar la vida. En este caso, salvar la vida era no pagar el impuesto para poder así afrontar los difíciles problemas económicos y financieros.

Ante esta realidad, con un estricto criterio de justicia social, es decir de aquella forma de justicia que procura restablecer el equilibrio social favoreciendo a los necesitados con una exención de las cargas y los deberes, según un criterio de equidad que corrige lo justo legal y con mayor razón el derecho injusto, es evidente que no podemos sancionar a las víctimas de un inaceptable régimen liberal burgués y de una dictadura irresponsable.

En definitiva, señor presidente, en las circunstancias, aplicamos el ejemplo de la regla de Lesbos, flexible y acomodable a las formas de los objetos que medía, y no aceptamos para el pueblo el lecho de Procusto, que torturaba y mutilaba a las víctimas para que éstas lo cubriesen en toda su longitud.

Se declara responsables a los grandes evasores y a quienes intenten evadir impuestos a cargo de la Dirección General Impositiva, en forma total o parcial, por cualquier medio doloso. Se tipifica la figura estableciendo que son los que evaden por un monto superior a 250.000 pesos ley 18.188, con lo cual se calcula que corresponde a la renta de un capital de 500 millones de pesos.

Se castiga también a los agentes de retención que no ingresen el impuesto retenido o percibido dentro de un plazo, y a quienes mediante recursos como los que se establecen en el artículo 39 de la ley pretendan el vaciamiento, que se sanciona con la inhabilitación para el ejercicio del comercio, la profesión y la función pública cuando se comprueba la realización o participación en los hechos penados por la ley.

Se castiga, señor presidente, uno de los hechos más negativos que sufre la sociedad y que constituye, como bien lo expresó el Poder Ejecutivo en los fundamentos del originario proyecto de ley, una alta forma de delincuencia, que por su decisiva influencia en el bienestar de la comunidad no puede ser pasada por alto y que constituye una amenaza tanto o más importante que la de otros delitos ya incriminados.

De los conceptos de justicia distributiva y de justicia social y general a que antes hiciéramos mención, surge modernamente el concepto de la justicia social, que constituye, con la soberanía política y la independencia económica, la esencia misma de la doctrina justicialista.

La justicia social es el valor de integración de la vida social humana en todas sus manifestaciones colectivas, porque ella tiende a favorecer a las clases más necesitadas, en cuanto ordena una distribución más equitativa de la riqueza a fin de asegurar mejores condiciones de vida. La tentativa de evasión fiscal y la evasión constituyen un atentado contra la justa distribución de las cargas e impiden el equitativo reparto de los bienes, afectándose así el bienestar mismo de la comunidad.

Por eso dijo el general Perón: «Es muy triste el mundo de la injusticia para obligar a los hombres a vivir en él; es muy intolerable soportar la miseria en medio de la abundancia, y ésta es una cuestión a la cual hay que ponerle término de una vez por todas.»

En definitiva, señor presidente, se castiga la tentativa y la evasión, porque en uno y en otro supuesto se da el hecho humano contrario a la justicia social, es decir al bienestar del pueblo y de la sociedad, que es tanto más reprochable cuando la comisión del mismo proviene de quienes están más obligados a actuar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, como lo exige el principio legal enunciado en el artículo 902 del Código Civil.

Por estos fundamentos, señor presidente, pido al Honorable Senado preste su aprobación a este proyecto de ley.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: iniciamos la consideración de una ley de significativa trascendencia. Por ello el honorable cuerpo excusará que analice con algún detenimiento el significado y alcance de las disposiciones contenidas en este proyecto.

Pero no puedo dejar de señalar, antes de entrar en materia, que me ha sorprendido cierta referencia del señor miembro informante, cuando no sólo enjuició los últimos diecisiete años, a lo cual suele hacerse referencia incurriendo en un error de generalización, sino que incluso remarcó que en este caso no se trataba de ese error, sino que expresamente incluía los períodos de gobiernos constitucionales, entre los que

se cuenta el que presidiera el doctor Arturo Illia. Al respecto debo decir que ningún interés, ni de afuera ni de adentro, por poderoso que haya sido, tuvo influencia en la conducta liberadora e independiente del gobierno de ese dignísimo ciudadano.

Sr. Díaz Biale. — ¿Me permite, señor senador?

Sr. de la Rúa. — Con mucho gusto.

Sr. Díaz Biale. — Lamento si me he expresado mal. Yo quise hacer implícitamente un elogio, pues lo que manifesté fue que el gobierno de la Unión Cívica Radical bajo la presidencia del doctor Illia no podía realizar sus propias virtualidades, porque los intereses antinacionales se lo impedían, y que ellos determinaron su caída. Es decir que no lo sacaron por malo sino por bueno.

Sr. Pugliese. — Eso sería válido para todos los gobiernos derrocados.

Sr. de la Rúa. — Le agradezco la aclaración, porque al haber entendido sus palabras en sentido literal he querido refirmar que no hubo ningún interés que influyera sobre la marcha de ese gobierno radical y que sólo la fuerza de las armas pudo frustrar su acción.

Señor presidente: la política tributaria es un instrumento fundamental para el progreso social, no sólo por su incidencia en la planificación de la inversión y el consumo, sino como medio para lograr una justa distribución de la riqueza, esa distribución de la riqueza cuyo sentido es preciso revertir para favorecer a los sectores trabajadores que la producen.

En nuestro país el deterioro del sistema fiscal ha llegado a límites inverosímiles. El régimen impositivo es aún tremendamente regresivo y los sectores de menores ingresos son los que pagan una proporción mayor de sus entradas. A través de los años ese régimen ha concentrado la riqueza en torno de minorías selectas y actúa de manera acumulativa en el despojo de grandes sectores de la población. Esta situación debe cambiar para que el impuesto sirva como medio eficiente a fin de mejorar la distribución del ingreso nacional que trasunta graves injusticias y es por ello causa de hondas tensiones sociales y se puedan echar las bases para la instauración de una auténtica democracia social.

Es preciso entonces, y pienso que todos estamos de acuerdo con ello, efectuar una profunda reforma impositiva que ponga justicia en el sistema, lo simplifique y generalice su base de imposición dándole suficiente rendimiento como para financiar el gasto público sin que deba acudirse para ello a la emisión que genera inflación que en definitiva es soportada por los sectores más débiles, aquellos que no cuentan con bienes suficientes que les sirvan de refugio frente a la desvalorización monetaria.

Está pendiente de consideración en el Honorable Cámara de Diputados el proyecto de reforma impositiva enviado por el Poder Ejecutivo.

Mientras esa reforma se discute con la esperanza de que traiga más justicia a esta situación, la sanción penal para quienes incurren en fraudes fiscales es ya un paso en el camino que queremos transitar, de modo que el régimen impositivo no permita privilegios de ninguna clase y se acentúe el sentido de solidaridad que debe estar en la base del sistema.

Quiénes más violan esa solidaridad son seguramente ciertos grupos de intereses cuantiosos que, prevaliéndose muchas veces de los resquicios del ordenamiento jurídico, realizan manobras para burlar sus deberes fiscales y atentan así contra el orden social y la moral pública.

Los efectos dañinos de esta evasión son gravísimos.

Yo no soy afecto a las cifras, señor presidente, y en general las desconozco, pero en este caso he acudido a las referencias de los hombres que saben. Encuentro, por ejemplo, en un estudio del profesor Oszlak sobre *Inflación e impuesto a los réditos en Argentina*, que es posible señalar un coeficiente de evasión para el impuesto a los réditos en el período 1951-1960, que es el que menciona, que va del 46 al 63 por ciento. Y aun señala que, si bien en otro tipo de impuesto la evasión quizá sea más difícil, es seguro que alcanza también índices notables.

Esto contribuye a ahondar la injusticia del sistema impositivo porque, para compensar los desniveles causados por la evasión, se incrementan los impuestos de recaudación segura, aquellos en que la evasión es imposible o casi imposible, y por esa vía, en definitiva, se castiga a los sectores de menores recursos. Esto trae, sin duda, desmoralización, sentimientos de injusticia y tensiones sociales, en un panorama que se completa con la ventaja que, a la vuelta de los años, suelen obtener los evasores a través de condonaciones, moratorias o blanqueos.

Bien se ha dicho —y séame excusada la cita que efectuaré— que «de una u otra manera en que se compense la falta de recursos fiscales evadidos, su consecuencia es una peor distribución del ingreso nacional. Cuando la brecha se cubre con emisión monetaria, es obvio recordar cómo la inflación afecta a los sectores más débiles de la sociedad, carentes de bienes físicos que sirvan de refugio a sus escasos ahorros. Además, como la evasión es mayor en los impuestos sobre las utilidades si la compensación se lleva a cabo por aumento de las alícuotas de los impuestos existentes o por creación de nuevos tributos, generalmente se recurre para ello a los impuestos indirectos, de fácil traslación por vía de los precios, que acentúa la regresividad en la distribución del ingreso».

Estas son palabras, señor presidente, de un notorio especialista de gran sensibilidad social, como es el doctor Enrique García Vázquez, quien en una conferencia sobre los *Fundamentos para una reforma impositiva* agrega que «no habrá una verdadera reforma impositiva si

no se reduce radicalmente la evasión fiscal», para lo cual señala que es indispensable, «en razón de lo avanzado del proceso, agravar las penalidades para quienes cometen fraudes fiscales, los cuales han de ser claramente tipificados para evitar toda clase de arbitrariedades».

Dice este mismo autor, con razón, que «la administración fiscal debe ser provista de mayores medios y deben suprimirse todas las disposiciones que actualmente, por seudos motivos de protección económica, impiden investigar ciertas operaciones de contribuyentes, lo que sólo sirve para ocultar la evasión». Seguramente es un justo reclamo el que formula García Vázquez, en el sentido de que «el ente recaudador debe manejarse de manera más racional y efectiva, centrando sus esfuerzos en detectar a los verdaderos evasores y colaborando de todas maneras con el contribuyente que abona los impuestos que le corresponden, y que hasta el presente ha sido continuamente defraudado».

En el mismo sentido, en un reciente trabajo sobre *La evasión fiscal en la Argentina*, publicado en el número 268 de «Derecho Fiscal», los profesores de Córdoba Villegas, Argüello, Vélez y Spila, entre los principios básicos de un programa contra la evasión fiscal reclaman el establecimiento de penas graves que «además de abarcar el aspecto de la multa y la privación de la libertad, traigan aparejadas sanciones inhabilitatorias para el ejercicio de la rama de la actividad donde se produjo la evasión, para contratar con el Estado, ejercer funciones administrativas y postularse a cargos electivos, según la gravedad de la evasión, y dándosele al contribuyente seguridades en su aplicación, las que deberán ser impuestas por el Poder Judicial».

Pido ser disculpado por la larga cita, pero era importante precisar, a través de lo escrito por quienes conocen en profundidad este tema, el sentido que debe tener una política fiscal y de reforma del actual sistema. Mucho de esto y de lo que estos autores postulan es lo que se procura remediar con el proyecto de ley en consideración.

El Poder Ejecutivo nacional remitió en su momento a la Honorable Cámara de Diputados un proyecto en el mismo sentido, que dio lugar, en esa Cámara, a la producción de dos despachos, uno de mayoría —que resultó aprobado pero que no está en consideración en este debate— y otro de la minoría.

Pese a que hubo dos despachos, en la preocupación de todos estaba, sin embargo, presente la voluntad de sancionar al gran evasor, a aquel que por su modo fraudulento de actuar puede considerarse que tiene una grave peligrosidad social; y también queda expresada en ese debate la intención común de no sancionar al pequeño contribuyente, y menos aún por simples actos omisivos.

Dijo en ese debate el señor diputado Porto que el despacho de minoría —que él subscri-

bía— procuraba «impedir que un millón de argentinos pueda ir a la cárcel, porque se olvidaron de presentar su declaración jurada, o de pagar en término, o estrictamente bien, su tributo».

Por su parte, el diputado Díaz Ortiz formuló la adecuada distinción entre los pequeños contribuyentes que son víctimas de un sistema económico y «el evasor grande, no sólo por los montos defraudados sino también por el tipo de maniobras de que se vale para defraudar al Estado», circunstancia que ha señalado con precisión también el señor miembro informante de nuestra comisión.

Con claridad conceptual, a su vez, el diputado Fonte, apoyando el despacho de la minoría, se refirió a los grandes defraudadores fiscales, ya que el objeto del despacho que apoyaba era —como dijo— sancionar la evasión por parte de las grandes empresas que mediante maniobras maliciosas incurran en esa infracción.

Es cierto, señor presidente, que para dar este paso de establecer sanciones penales para el fraude fiscal puede parecer necesario que previamente se sancione la reforma impositiva, pues de otro modo podría objetarse que estamos agregando una injusticia sobre un sistema ya de por sí injusto.

Sin embargo, hay dos factores que deben tenerse en cuenta. Primero, que se trata de sancionar penalmente al gran evasor, a aquel que viola de manera grave el deber de solidaridad y el derecho del Estado de percibir las rentas que hagan posible una justa distribución de los ingresos. Segundo, que se sanciona el fraude fiscal y no la mera evasión, es decir, aquellos actos que por sus formas comisivas superan el mero incumplimiento del deber de pagar el impuesto para constituir maniobras reprochables desde el punto de vista penal.

Seguramente el problema más arduo en este tipo de leyes consiste en la tipificación de ambos caracteres. Y a esta cuestión la comisión se ha abocado con ahínco, desplegando al respecto una tarea intensa.

El despacho de la mayoría de la Cámara de Diputados se refirió a que «la magnitud económica o financiera fuere significativa», mientras que el despacho de la minoría procuró evitar la prisión para el pequeño evasor, previendo una pena de multa alternativa que liberara de la pena de prisión.

Dentro de la complejidad que la cuestión reviste, el proyecto en consideración propone una solución que, si bien no es perfecta, desde el punto de vista técnico resulta más objetiva, por lo tanto más adecuada y, de consiguiente, más cercana a la solución de justicia que se quiere dar. Por lo menos, la cuantificación del monto evadido evita dejar librado el asunto a la discrecionalidad del juez en un plano de subjetividades que en materia penal es siempre peligroso, porque está en juego la libertad personal.

De este modo, se ha entendido contribuir a delimitar el campo de lo reprimido por la norma.

Pero el otro aspecto no es menos complejo, señor presidente. Todos los proyectos que ha habido sobre esta materia sancionan dos figuras fundamentales: la evasión del pago de un tributo, por una parte, y la omisión de ingresar el impuesto retenido o percibido por los agentes de percepción o retención, por la otra.

En cuanto a lo primero, es decir a la evasión, el elemento esencial de la figura es caracterizado de manera diversa por los distintos proyectos. Así, el texto aprobado por la Cámara de Diputados, que, como hemos dicho, no es objeto de consideración en este debate, pero que no puede dejar de ser tenido en cuenta como antecedente importante, lo caracteriza como «evasión mediante ocultación o simulación».

El despacho de la minoría de la misma Cámara se refiere a «evasión mediante maniobras maliciosas». Es indudable que la descripción del tipo penal resulta decisiva para la correcta formulación de la norma. Ambos textos de la Cámara de Diputados agregan a la evasión del impuesto otro elemento consistente en un hacer o no hacer que determina error o engaño al organismo recaudador, caracterizándose la evasión mediante elementos que la tipifican, diferenciándola del mero incumplimiento, para evitar así caer en la prisión por deudas.

A nuestro criterio, los textos sostenidos por los dos despachos de la Cámara de Diputados no conforman plenamente. El ocultamiento o simulación, del despacho de la mayoría, deja fuera hechos que deben estar comprendidos en la represión, sin que resulte suficiente la enumeración de los medios ardidosos que se hace en el artículo 304 que se incorpora al Código Penal.

Las maniobras maliciosas, del texto de la minoría, constituyen una forma excesivamente vaga y genérica. Consideramos, señor presidente, que lo punible debe ser el fraude fiscal cometido mediante maniobras ardidosas que provoquen error en los organismos recaudadores o la ocultación, igualmente ardidosas, de la riqueza imponible para reducir o evitar el ingreso del tributo. En suma, que el buen camino es no apartarse de la caracterización básica de la defraudación que en la legislación penal está representada por tres figuras fundamentales: la estafa, la apropiación o retención indebida y la administración fraudulenta.

Por eso compartimos la solución que, luego de útiles discusiones en el seno de la comisión, se ha dado en el despacho que consideramos, al utilizarse la figura típica del ardid o engaño ya prevista en el artículo 172 del Código Penal y sobre la cual la jurisprudencia y la doctrina han elaborado conceptos claros y suficientemente decantados. Ciertamente es que aquí se agrega el ocultamiento malicioso. Si bien puede quedarnos

el temor de que la expresión «malicioso» se vincule con el elemento intencional, creo que ha de entenderse bien que debe considerárselo comprendido en el tipo básico del ardid o del engaño. Es decir, no se está sancionando la simple declaración mendaz de la base imponible —lo que en otras legislaciones se conoce como perjurio— sino el ocultamiento acompañado de maniobras aptas para causar error en el organismo recaudador.

La diferencia fundamental de este tipo de delito con la estafa reside, entonces, no en el medio empleado para obtener la disposición patrimonial, sino en que se sanciona un hecho en el cual, precisamente, esa disposición patrimonial no existe, debiendo haber existido.

Mucho se ha discutido si el fraude fiscal así concebido encuadraba o no, antes de ahora, en el artículo 173, inciso 5, del Código Penal, como fraude en perjuicio de la administración pública. Muchos fallos lo consideraron incluido en esa norma y aun cierta parte de la doctrina. Jarach, en su *Curso superior de derecho tributario*, tomo I, página 352, sostiene que «es una materia digna de mayor discusión, y tal vez puede ser muy plausible la doctrina opuesta», pero opina que «la punibilidad en el aspecto tributario no excluye la punibilidad en el aspecto criminal, ni viceversa; es decir, son compatibles —así lo considera— las dos sanciones acumulativamente. Se trata de un caso —dice— de concurso ideal de delitos». La buena doctrina, sin embargo, es la contraria, independientemente del problema que fatigó a muchos autores sobre si las multas establecidas por la ley 11.683 tienen carácter penal o administrativo, punto sobre el cual la Corte Suprema se pronunció reconociéndole su evidente carácter penal y sancionados (*Fallos*, tomo 205, página 177; «La Ley», tomo 104, página 185). En aquel sentido coincidieron Giuliani Fonrouge y Bello en su *Procedimiento impositivo* y la solución es coincidente con la enseñanza de Soler (*Derecho penal argentino*, tomo IV, página 283 y siguientes). Ricardo Núñez, afrontando directamente la cuestión, la aclara suficientemente con estas palabras: «Las defraudaciones impositivas no caen en el inciso 5º sino que están previstas y reprimidas por las leyes pertinentes. La defraudación impositiva es en esencia una omisión fraudulenta del deber de contribuir para la formación de las rentas públicas, mientras que la defraudación del inciso 5º es una fraudulenta o abusiva privación de lo que ya es propiedad de una administración pública. La defraudación impositiva no se transforma en defraudación contra una administración pública por el hecho de que al cometerla se usen como medios delitos comunes». Son los mismos conceptos que en un desarrollo más amplio efectúa en la brillante nota publicada en «La Ley», tomo 74, página 566, que resume con exactitud los principios fundamentales que rigen la materia.

Frente a esto se trata ahora de caracterizar debidamente el fraude fiscal como figura independiente y además —esto es lo nuevo— de sancionarlo con pena de prisión. Tal lo que procura el despacho en consideración, trayendo una reforma trascendente al sistema fiscal argentino.

Es importante señalar el buen criterio seguido por los autores del proyecto de prever estas figuras en una ley especial. La incorporación de ellas en el Código Penal como lo había hecho la Cámara de Diputados, era no sólo inadecuada sino contraria al origen constitucional de normas de este tipo. Es que en el fondo esa solución de la Cámara de Diputados se compaginaba exactamente con el error en que se incurría al incluir en la figura la evasión de un tributo provincial.

Pienso, señor presidente, que cuando dictamos esta ley que reprime el fraude fiscal no estamos obrando en virtud de la facultad de dictar las leyes penales previstas en el artículo 67, inciso 11, de la Constitución, sino por las que derivan de los restantes incisos de esa misma norma, de acuerdo con los cuales el Congreso puede dictar leyes especiales.

Ricardo Núñez, a quien citaba hace un momento, acaba de publicar en «Jurisprudencia Argentina», número 4.396, del 16 de noviembre, un artículo que con su clásico vigor didáctico ha titulado «Otro desfiguramiento de la Constitución». En él critica fundadamente la sanción de la Cámara de Diputados en cuanto incluye en el delito la invasión de tributos provinciales. Al referirse a esta cuestión, señala que «las materias de estas leyes especiales no pueden trasvasarse al ámbito de lo que por ser materia nacional común (artículo 67, inciso 11) vincula a todos los habitantes del país; ni puede trasvasarse al ámbito de lo que por ser provincial (artículos 104 y 105) vincula sólo a los habitantes de cada provincia, porque en el sistema jurídicopolítico de la Constitución esas materias conciernen de manera exclusiva a lo que representa la unidad política y administrativa de la Nación», en virtud de lo cual concluye: «no se puede castigar como delito común definido por el Código Penal la evasión maliciosa de un tributo provincial».

Pienso que estas reflexiones no serán útiles si se tiene en cuenta que la Cámara de Diputados adoptó otro criterio.

Sr. Díaz Bialek. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. de la Rúa. — Sí, señor senador.

Sr. Díaz Bialek. — Simplemente deseo expresar que las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario y las Segundas Jornadas Argentinas de Derecho Tributario coincidieron con el criterio del doctor de la Rúa y del que habla, de hacer una ley y de no incluir la misma en el Código Penal.

Sr. de la Rúa. — Muchas gracias.

Pienso, señor presidente, que es evidente que, aun cuando no se clarifique el carácter nacional

o provincial del tributo evadido, si las nuevas normas se incorporaran al Código Penal se estaría insertando en él una legislación especial en lo que, como el Código Penal, es legislación común, y se avanzaría sobre las facultades de las provincias. Es decir que el Código Penal no debe condenar todo lo punible, sino sólo el derecho penal común.

Las infracciones a leyes especiales, que la Corte Suprema ha llamado leyes federales, leyes nacionales o leyes especiales simplemente, constituyen una materia propia y distinta que en el ámbito de la competencia tiene también sus consecuencias, y ya veremos en este aspecto cómo las resuelve este proyecto. De allí el acierto, que debe destacarse, de prever este tipo de sanciones mediante una ley especial y de que se haya enmendado en la comisión, como resultado de la discusión que con amplitud y criterio constructivo realizáramos en su seno, la competencia originariamente atribuida a los tribunales ordinarios de provincia tomando en cuenta que por tratarse de una ley especial deben ser lógicamente competentes los tribunales federales. Es el mismo problema que se plantea en el proyecto que consideraremos después respecto de los delitos por violación al régimen de inversión de capitales extranjeros.

Lo que sí nos parece riesgoso es que la tipificación de la conducta en el artículo 1º del proyecto se haga depender del organismo recaudador. El artículo 1º se refiere, en efecto, a la evasión de «uno o más tributos a cargo de la Dirección General Impositiva».

Si bien esto evita, por una parte, que se consideren comprendidos en la norma los delitos por infracción a las leyes de Aduanas, cuya recaudación está a cargo de la Dirección Nacional de Aduanas, a mi juicio este texto no suministra una caracterización adecuada del carácter nacional del impuesto y tiene el grave riesgo de que por un mero acto de transferencia de organización administrativa lleguen a encuadrarse en la figura penal hechos que deberían estar excluidos de ella, como si la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires celebrara un convenio con la Dirección General Impositiva para la recaudación del Impuesto a las Actividades Lucrativas, que es de carácter eminentemente local.

Es decir, que el carácter nacional del impuesto debe provenir de la ley que lo establece y consagra, y precisamente la norma que queremos sancionar procura dar protección penal a la potestad fiscal del Estado nacional, expresada en las leyes que establecen los tributos, y que son sancionadas por el Congreso de la Nación en virtud de facultades expresas y específicas que le acuerda la Constitución, y aún más, según un trámite regulado por la propia Constitución que asume los caracteres de verdadera garantía, en cuanto este tipo de leyes sólo pueden iniciarse

en la Cámara de Diputados por haberse considerado que en ella reside la más directa representación popular.

Por ello nosotros objetamos este aspecto de la norma y auspiciamos que se suprima esa caracterización del tributo. Sería suficiente, tal vez, con callar, porque la norma sólo puede referirse a impuestos nacionales. Pero si se quiere ser más explícito bastaría con referirse al tributo nacional con expresa exclusión de lo que atañe a la ley de Aduanas, porque esto es lo único que se quiere y lo único que se puede proteger con la sanción penal.

Tampoco nos parece aceptable que se vincule el tipo penal con la reincidencia. El artículo 1º dice que el límite cuantitativo «no regirá para quienes reincidieran en el hecho incriminado».

Y bien, señor presidente, el hecho incriminado supone una evasión superior a los 250.000 pesos. ¿Cómo se puede reincidir en ese delito evadiendo un monto menor? Lo que ocurre es que se mezclan aquí cosas distintas, como son la figura penal, la conducta prohibida, con la institución de la reincidencia, que es una cosa distinta. Nosotros proponemos, por eso, la supresión lisa y llana del último párrafo del artículo 1º. Es decir, optamos por la cuantificación o la eliminamos, pero no podemos hacer depender la configuración del delito de un hecho hipotético, de que se incurra o no en un futuro justamente en ese delito, lo que sería reincidencia.

También es importante señalar —lo digo para que conste debidamente— que en el seno de la comisión dejamos establecido que la actualización de ese monto, si fuese necesaria en un futuro, no podría ser delegada en el Poder Ejecutivo sino que deberá ser motivo de una ley especial. Y esto es lógico, ya que en virtud del artículo 18 de la Constitución Nacional sólo una ley del Congreso puede establecer conductas punibles.

Hemos objetado también en la comisión la referencia a la tentativa, que se incluye en el artículo primero al aludirse a los que «intentan evadir». Pensamos que la figura de la tentativa resulta de aplicación inevitable porque el Código Penal, en su Parte General, es integralmente aplicable a leyes de este tipo, de acuerdo con lo que dispone su artículo 4º. Pero es que además, señor presidente, consideramos que es mala práctica la de esas leyes especiales en las que se quieren eliminar conquistas que la ciencia penal ha incorporado a la legislación moderna.

Y así hemos visto casos de leyes en que no sólo se establece la identificación de la tentativa con el delito consumado sino también la supresión de la condena condicional o de la libertad condicional y aun otras que prohíben la excarcelación, tema sobre el cual en este recinto al tratarse la ley modificatoria del ré-

gimen de excarcelación, se ha señalado que vulnera preceptos claros de la Constitución Nacional.

Por eso somos contrarios a desviaciones de esta naturaleza y consideramos preferible dejar la figura lo más clara y objetiva posible. En lo que sí estamos de acuerdo es en sancionar la conducta descripta con pena de prisión. Esto implica una toma de posición fundada en las razones que enunciábamos al comienzo.

Definido el ámbito de aplicación, la pena alternativa de multa resultaría injusta por cuanto configuraría una evidente desigualdad entre la persona que puede pagarla y aquella que por carecer de medios económicos no lo puede hacer. Y tampoco se justifica la multa conjunta porque ésta está prevista y subsiste en las leyes impositivas comunes y será aplicada por la vía fiscal habitual.

En el artículo 2º se prevé otra figura que consiste en no ingresar a los organismos recaudadores los importes percibidos o retenidos cuando se obre como agente de retención o percepción. Cabe señalar que el importe, a nuestro criterio, debe haber estado efectivamente en poder del agente de retención o percepción. Con ello, el comportamiento que se pretende castigar es el incumplimiento de la obligación del agente, en el plazo establecido por la ley, de ingresar las sumas realmente retenidas o percibidas de manera que no se configura, a través de un artificio jurídico, una forma encubierta de prisión por deudas. La aclaración es importante porque para esta figura no juegan los límites cuantificadores del artículo 1º.

El artículo 3º prevé una figura agravada del artículo 1º, en base a los medios empleados para la comisión del delito. Personalmente hubiese preferido que la escala penal del artículo 1º se extendiera, para que en su amplitud el juez individualice la pena evitándose la descripción de casos especiales. Y esto porque generalmente ocurre que esas descripciones no son siempre cabales y completas. Para dar un ejemplo, podría decir que se agrava la figura cuando se utilizan los medios aquí descriptos: formas societarias simuladas, por ejemplo; pero no se la agrava cuando para lograr el fraude fiscal se comete otro delito, lo que tendría sin duda mayor trascendencia y gravedad que cualquiera de los casos de simulación en sí mismos no delictivos.

Nos parece bien que en el artículo 4º se castigue la extorsión cometida en base a imputar a otro los delitos previstos en la presente ley. Pero pensamos que aquí se incurre en lo que me atrevo a considerar un error similar al del artículo 3º: en lugar de remitirse al Código Penal, se insiste en describir nuevamente las mismas figuras. Confiamos que no se produzcan complicaciones en la aplicación práctica, en la medida en que no se hayan introducido va-

riantes en las figuras y se mantengan los mismos textos del Código Penal.

Tal vez sea parecida la crítica al artículo 5º, que pretende crear una regla propia de participación criminal, cuando más fácil era aplicar la participación ya prevista en los artículos 42 y siguientes del Código Penal. Es decir, todos los que hayan intervenido en la comisión del hecho son punibles de acuerdo con el grado de su participación. Ninguna necesidad existe para que la ley efectúe una nueva enumeración, máxime cuando ésta, al ser incompleta, puede dejar afuera a notorios culpables.

Tal vez no sea ocioso, señor presidente, recordar que el artículo 4º prevé que la parte general es aplicable también a las leyes penales especiales.

Sé que el argumento en defensa de estos preceptos consiste en una supuesta función docente y didácticamente persuasiva que se quiere atribuir a la ley. Por mi parte, pienso que esa función no se alcanza a cumplir ni se respeta la técnica, ni se da la solución mejor. Realmente reconozco que todo esto puede ser secundario; pero hacía a mi conciencia no callarlo, aunque tal vez, por lo avanzado de la hora, hubiera debido ajustarme más a la prudente regla de lo breve.

En el seno de la comisión propusimos que se incluyera expresamente el encubrimiento de este delito, y la comisión lo ha hecho remitiéndose a la parte general del Código Penal. En la discusión en particular volveremos sobre este aspecto para hacer el comentario sobre el texto despachado por la comisión.

En relación a los procesos procesales que incluye el proyecto, pensamos que debe dejarse operar a las disposiciones rituales en la materia propias de la legislación común, es decir, el Código de Procedimientos en lo Criminal de la Nación. No nos oponemos a que se sustituya el órgano normal de la prevención, que es la policía, por el organismo competente en esta materia, que es la Dirección General Impositiva. La especialidad del asunto así lo aconseja. Por ello, conviene remitirse al Código de Procedimientos en Materia Penal, pero aclarándose que actuará como autoridad preventora la Dirección General Impositiva. De este modo evitaremos duplicaciones o disposiciones en pugna con las funciones que la Constitución otorga a los jueces.

Considero inútil el primer párrafo del artículo 10 del despacho, porque no hay más cuestiones prejudiciales que las previstas expresamente por la ley. Tal texto se proyecta, supongo, por aquello de que lo que abunda no daña.

El segundo párrafo pienso que puede privar al imputado del derecho a la sentencia y pone en manos de la Dirección General Impositiva un poder casi discrecional de oportunidad sobre la represión de estos delitos, alterando el principio de legalidad.

Nos preocupa que en el inciso b), por el cual se faculta a la autoridad preventora a exigir la presentación de comprobantes y justificativos, se esté violando la norma del artículo 18 de la Constitución Nacional, por el cual nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Aquí no estamos, señor presidente, en el problema de la determinación del impuesto, sino en la investigación de un delito, y si se pudiese obligar a los culpables a suministrar la prueba de su propia responsabilidad y, por consiguiente, la base de su propia condena, estaríamos violando un precepto constitucional que es una conquista de la cultura y de la civilización modernas.

Debo expresar, por fin, mi satisfacción porque en el seno de la comisión nos hayamos puesto inmediatamente de acuerdo sobre la redacción del inciso d) en cuanto al modo de tramitarse las órdenes judiciales de allanamiento. En este sentido, se ha modificado la fórmula imperativa que tenía el proyecto original, según la cual parecía que el juez estaba compelido, sin discriminación posible, a emitir la orden de allanamiento, reemplazándola por una redacción que deja bien en claro que es el juez, precisamente, quien resuelve, y que ésta es una facultad propia de él, en virtud de la cual debe formular, en cada caso, un juicio de valor sobre la procedencia de la solicitud del órgano preventor. De este modo queremos preservar la inviolabilidad del domicilio e insistir en la necesaria garantía judicial para un asunto de tanta trascendencia como es un allanamiento, en un todo de acuerdo con el espíritu y la letra del artículo 18 de la Constitución Nacional.

Pensamos que si se hubiera efectuado la remisión a las normas procesales comunes, la aplicación del capítulo respectivo del Código Procesal Penal sobre allanamiento hubiese significado una solución más directa.

En cuanto al artículo 11, relativo a la competencia, nos complace que se haya avanzado en esta materia al asignar el juzgamiento de estos delitos a los jueces federales. No nos satisface, en cambio, que esa competencia se determine en virtud del domicilio del evasor. Simplemente, porque el artículo 102 de la Constitución Nacional, que hemos recordado tanto cuanto calificamos de inconstitucional aquella famosa Cámara Federal en lo Penal, de triste recuerdo, establece que las causas penales deben terminarse en el territorio de la provincia donde los hechos se hubiesen cometido. Tal vez una observación similar pueda adelantarse al despacho sobre delitos vinculados al régimen de inversiones extranjeras.

He formulado este rápido análisis, señor presidente, y ruego a los señores senadores, sobre todo por lo avanzado de la hora, que excusen si estas referencias han sido muy prolijas o extensas. No hemos querido traer aquí el latín, sino que he considerado importante que estas razones quedasen debidamente expuestas, en un

asunto que ha de ser considerado con posterioridad, en revisión, por la Honorable Cámara de Diputados. Además, todas estas consideraciones, en una ley novedosa en el país, son imprescindibles o útiles por lo menos, para una recta interpretación de la ley.

Señor presidente: en el debate de la Cámara de Diputados, representantes de nuestro sector señalaron la necesidad de legislar con prudencia en esta materia, de modo de no crear sobre un sistema injusto —como dije hace un momento— una injusticia mayor. Con mucha razón los diputados Fonte y Day reclamaron, como previos a la consideración de una ley de este tipo, el estudio y sanción de la reforma de la legislación impositiva. Dijo allí el diputado Day: «Estamos dictando normas sin saber si serán aplicadas para este régimen injusto que tenemos, o si esa reforma, tan prometida, tendrá la justicia suficiente como para que esta legislación penal no se convierta también en un injusto elemento persecutorio», y señaló su preocupación de que con el proyecto de la mayoría de esa Cámara en lugar de asegurarse la lucha por la liberación se la estuviera haciendo con balas de papel y en trincheras de expedientes, permitiendo que los grandes evasores no sean sancionados.

Nosotros, seguramente, también hubiéramos preferido que antes de considerarse esta ley se trataran los proyectos sobre reforma impositiva. Pero, puesto el asunto en consideración y comprendiendo la trascendencia que esta cuestión reviste, así como la adecuación y mejoras que se han introducido en el texto, estamos dispuestos a darle nuestro voto favorable en general, con las observaciones y reservas que he señalado, porque aspiramos a contribuir de este modo a que la recaudación fiscal no padezca las graves consecuencias de una evasión impune. Consideramos que la sanción penal a los grandes defraudadores fiscales servirá para expresar en términos de ley represiva un sentido de moralidad ciudadana y una común vocación de que la solidaridad entendida como el deber de contribuir para que a través del Estado se logre una justicia social auténtica no se desvirtúe por las maniobras de quienes obran sólo bajo el impulso de su propio egoísmo.

Por eso expresamos el anhelo de que una ley como la que consideramos sea un peldaño más en la búsqueda de esa democracia social que debe desterrar los privilegios y asegurar a todos la plenitud del derecho a la vida.

Nada más.

Sr. Grubisich. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Grubisich. — He de hablar brevemente en este debate, para oponerme a la sanción del proyecto que consideramos.

Este proyecto, que reprime con cárcel la falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales —y tiene su origen en una iniciativa del Poder Eje-

cutivo, modificada al aprobarse en la Honorable Cámara de Diputados—, fue objeto de un esforzado y elogiado trabajo de la Comisión de Legislación General, que trató de coordinar la iniciativa original con la media sanción de la Cámara de Diputados, para mejorarla y superar las deficiencias del alcance y del ordenamiento legislativo observadas en su concepción.

Pienso, sin embargo, que el error parte de la decisión de insistir en una línea represiva para sancionar los delitos fiscales, con el objeto de impedir la evasión. Porque, previamente a la sanción de cualquier ley, es necesario determinar cuál es el objetivo buscado y la forma idónea que se piensa instrumentar para alcanzarlo.

Así, detectada la cuantiosa evasión por parte de los contribuyentes al pago del impuesto a los réditos y ensayada la pena del encarcelamiento para los defraudadores, con el objeto de corregir esa evasión, si dicha medida no dio resultados esperados entiendo que la insistencia del mismo criterio conducirá, lógicamente, a iguales resultados, por cuanto las causas que motivan la evasión no se remedian.

Se ha dicho en el curso de este debate —que he escuchado atentamente— que una de las causas generadoras de la gran evasión fiscal es la inflación. Indudablemente ello no es atribuible directamente a los contribuyentes, porque el manejo de la economía y la prevención de las deficiencias orgánicas del país en esta materia constituyen un inexcusable deber del Estado, que no puede ser transferido al sector contribuyente ni al pueblo de la República.

También se ha expresado que la falta de una política económica de contenido social, comprendida y respaldada por el pueblo, ha sido uno de los motivos por los cuales en determinado momento —incluso con la toma de una posición política— los ciudadanos se negaron a pagar las cargas fiscales. Y es evidente que el pueblo, antes de ahora, cuestionó la legitimidad de muchos actos de gobierno, negando valor moral a las decisiones por falta de autenticidad en los actos, e incluso de las personas en las cuales las normas tenían su origen.

En nuestro país hemos tenido políticas que eran del ministro fulano de tal. Acá no había una línea económica interpretada por todo el pueblo y sostenida por él. Si la política era de un ministro determinado, en consecuencia el pueblo no tenía obligación de respetarla, porque no era su política y, además, porque generalmente respondía a intereses sectoriales y no a los intereses del pueblo.

Otra cosa que se ha apuntado, y que tiene verdadera importancia, es la frondosidad de las leyes y reglamentos, de las disposiciones, planillas y fechas de vencimiento que los contribuyentes deben conocer. Como consecuencia de ello, realmente no están en condiciones de cumplir por sí mismos los requisitos exigidos, sino que deben valerse de terceros que están per-

manentemente actualizados con respecto a las constantes modificaciones que sufren la legislación, los reglamentos y la interpretación de dichas normas.

Por último, se ha hecho referencia a la mala aplicación por parte del Estado de los recursos fiscales.

Es decir que todo este panorama trajo como consecuencia que el número de contribuyentes, potencial y no real, tenga una diferencia significativa, y que en el tiempo el número de contribuyentes que cumplen sus obligaciones ha ido mermando. Esto quiere decir que a medida que se notaban las fallas de la gran evasión fiscal que se producía, el Estado fue legislando en una escalada por incrementar las penas con las cuales se castigaba esa evasión, y como consecuencia de ello nos encontramos en este momento con que el número de contribuyentes es el menor que tiene el país. Es evidente, entonces, que la política de represión no ha dado resultados.

En consecuencia, entiendo que lo que corresponde hacer es la reversión de todas estas causas que han generado una situación de la cual, evidentemente, el país tiene urgente necesidad de salir.

No voy a entrar en la consideración de los aspectos de la ley, como por ejemplo, el artículo 19, donde se establece que hasta doscientos cincuenta mil pesos ley se castiga con cárcel y entonces en aquellos casos en que la cifra es menor en un peso al citado monto, el hecho no se castiga con la misma represión.

Voy a señalar, señor presidente, para terminar, que debería hablarse también del valor moral del castigo. Nadie desconoce que en el pasado cercano de la historia de la humanidad el castigo, el azote, la tortura, el método inhumano de reprimir en general, era de aceptación universal. A un delito, un castigo corporal. Esto era algo aceptado universalmente. Del mismo modo, el pensamiento contemporáneo considera a la cárcel no como el lugar donde sólo va a purgarse un delito, sino también que el Estado allí, en función de la ejecución de su responsabilidad como regulador del interés social, tiene que corregir a los delinquentes, para que éstos, por el convencimiento y la reeducación, no vuelvan a delinquir.

Yo me pregunto si, además de todas estas razones que me parecen atendibles para no sancionar la ley, el país está preparado para encarcelar a los delinquentes impositivos y reeducarlos para que en un futuro no vuelvan a delinquir.

Por estas consideraciones, señor presidente, dejo planteada mi oposición en general a la sanción del proyecto en consideración.

Sr. Díaz Biale. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Díaz Biale. — En este recinto, el señor senador León leyó la nómina de un blanqueo que

demostraba que quienes blanqueaban eran los grandes capitalistas y las grandes empresas monopolistas.

Por otra parte, he dicho en el informe que, conforme con el principio enunciado por el artículo 902 del Código Civil, a mayor responsabilidad, mayor es el deber de cumplimiento.

En cuanto a la oposición del señor senador respecto a reprimir con prisión —por vía de la cárcel—, quiero recordarle que la ley 514, que abolió la prisión por deudas, establecía en su artículo 2º que en los casos de insolvencia, cuando por información sumaria se acredite que ha habido dolo o fraude por parte del deudor, no quedaba comprendido en el artículo 1º que suprimía la prisión por deudas. Y aquí no se castiga por deudas. Se castiga el fraude, al que bien ha hecho referencia por extensión el señor senador de la Rúa; es decir, a la concreción de una serie de maniobras que llevan dolosamente a no pagar el impuesto por quien lo puede pagar, y tiene mayor obligación para hacerlo.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen en general.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (García, A. A.). — En consideración en particular.

—Se lee el artículo 1º.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: con un sentido de colaboración no he formulado todas las observaciones en la consideración en general, para no hacer demasiado difusa mi exposición. Ahora las voy a exponer, reiterando otras que si expuse anteriormente.

En este artículo 1º sugeriría, ante todo, suprimir la expresión «los responsables por deuda propia o ajena» y reemplazarla por esta otra: «el que en provecho propio o ajeno». Esta es una fórmula típica en nuestro derecho y en el comparado, para referirse al que no obra en nombre o beneficio propio. Además, permite suprimir la ejemplificación de autores o partícipes contenida en el artículo 5º.

Por otra parte, propongo la supresión de la expresión «intenten evadir», porque de todos modos la tentativa resultará punible de acuerdo con las normas de la parte general del Código Penal, según la remisión de su artículo 4º y la del artículo 15 del proyecto en consideración.

En tercer lugar propongo suprimir la última oración de este artículo 1º, ya que se confunde la punibilidad de la acción descrita con la reincidencia delictiva prevista en el artículo 50 del Código Penal y aplicable según el artículo 15 de este proyecto.

En cuarto término sugiero suprimir la expresión «a cargo de la Dirección General Impositiva», caracterizando el tributo como «nacional, con excepción de la legislación aduanera». Con esto quedará claro que la ley de aduanas se sigue aplicando para los delitos propios previstos en ella.

Y, por fin, también propongo aumentar la pena máxima a seis años, de modo de suprimir la agravante prevista en el artículo 3º y permitir, con la mayor amplitud de la escala punitiva, que el juez pueda graduar e individualizar la pena según la gravedad concreta de los casos.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. Díaz Bialek. — El señor senador de la Rúa, en su exposición en general, ha diferenciado y justificado la no inclusión en el Código Penal de una ley de esta naturaleza, con lo cual habíamos coincidido. Pero, a pesar de su criterio, insiste en la terminología del Código Penal, cuando ésta es una ley tributaria.

En cuanto a la oposición a que se mencione a la Dirección General Impositiva, creo que es injustificada, porque ella no cobra sino impuestos nacionales. El señor senador de la Rúa ha puesto como ejemplo la posibilidad de un contrato entre la Dirección General Impositiva y la municipalidad, pero el hecho de que ese ente se encargue de recaudar un impuesto, no cambia la naturaleza de éste, que seguirá siendo municipal, aunque el órgano recaudador pudiera no serlo.

En lo que se refiere a su observación respecto de la expresión «intenten evadir», el señor senador de la Rúa, que indiscutiblemente es un buen procesalista penal, vuelve a caer en su propósito de utilizar un lenguaje y una técnica propias del Código Penal en una ley tributaria que tiene su individualidad propia. Por otra parte, tratándose de una ley de la importancia que ha señalado el señor senador Martiarena, y además nueva, es necesario que se incluya el término «intenten», para que ningún contribuyente sea sorprendido y los funcionarios de la Dirección General Impositiva sepan también que el intento es punible. En consecuencia, sin perjuicio de valorar la observación jurídico-penal, creo que es necesario incluir «intenten evadir» porque así evitamos sorpresas en una ley nueva como ésta, en que se requiere claridad.

Sr. de la Rúa. — ¿Me permite, señor senador? Deseo expresar que, pese a estas observaciones que enumero, la norma me parece buena, casi excelente, pues se trata de objeciones de carácter secundario.

En lo que se refiere a la cuantificación, es decir, a los 250 mil pesos de impuesto evadido, reitero que no es una solución perfecta pero se aproxima más que otras al ideal buscado. No tengo elementos para saber si la suma que se fija es adecuada. El legislador obra en casos

como éste con cierta arbitrariedad, aunque en base a elementos de información sobre la medida a fijar. Es el mismo problema de la mayoría de edad, cuando se decide entre los 21 o los 22 años; o el de la capacidad para delinquir, fijada en los 16 años. Aquí la ley opta por una solución determinada.

Repito que carezco de los elementos para saber si esa suma de 250 mil pesos está de acuerdo con la gravedad de la evasión. Evidentemente se trata de un gran evasor, pero no sé si una suma menor no encuadraría también, acaso, en lo que quiere sancionarse.

Sr. Díaz Biale. — Es indiscutible que el señor senador de la Rúa, al informar en general, señaló la dificultad para tipificar el delito, e hizo la crítica justificada a la sanción de la Cámara de Diputados, que importaba una ley penal en blanco.

Es muy difícil definir quién es el gran evasor como concepto, pero en el orden práctico, por un proceso de comparación, la Dirección General Impositiva sabe quiénes son los grandes evasores porque sabe quiénes son los grandes contribuyentes. Y esta suma la incluimos no arbitrariamente, sino a través de ese proceso de comparación.

Hay una categoría que podemos calificarla de «grandes evasores», sin perjuicio de reconocer la dificultad de definir el concepto de «gran evasor».

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Sr. Cerro. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Si el señor senador Martiarena lo permite, cederé la palabra al señor senador Cerro para una aclaración.

Sr. Martiarena. — Con mucho gusto, señor presidente.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Cerro. — A los efectos de que quede claro para la interpretación de la ley, descarta que se indique a quiénes se tipificaría dentro de la figura fiscal «responsable por deuda ajena».

Sr. Díaz Biale. — A los mandatarios, a los que tienen que pagar por otros, a los administradores.

Sr. Cerro. — ¿Y a los profesionales que lo hacen la declaración?

Sr. Díaz Biale. — No, no. Como dije, a los administradores, a los mandatarios, a los gerentes, a los que representan a otro.

Sr. Cerro. — ¿Con representación legal?

Sr. Díaz Biale. — A los mandatarios.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Si el señor senador Cerro ha quedado satisfecho con la aclaración dada, la Presidencia concede el uso de la palabra al señor senador Martiarena.

Sr. Martiarena. — Quiero decir algunas cosas sobre este artículo 1º porque confieso que

me ha causado bastante inquietud esta definición del delito fiscal y de la pena que aquí vamos a votar.

Las vacilaciones mías han sido vencidas, en verdad, porque el texto que presenta la comisión es mejor que el que se propusiera originariamente.

En cuanto el texto anterior hablaba de «significativa magnitud» y eso era muy vago, yo participo de la observación y del criterio del señor senador de la Rúa, aunque debemos reconocer que no es totalmente satisfactorio hablar de 250.000 pesos anuales.

La observación que ha hecho el señor senador Grubisich va a quedar flotando en el ambiente: el que evade 24 millones de pesos no comete el delito, y el que evade 25 millones sí lo comete.

Pero yo quiero expresar, para tranquilidad del Senado, que lo que aquí se busca es un propósito fiscal. Lo que aquí se persigue —ésta es la interpretación que yo hago de este dispositivo legal que vamos a sancionar— es evitar la gran evasión de impuestos, la evasión que cometen quienes manejan los grandes negocios y que están substrayendo al patrimonio de la República, al que deben contribuir obligatoriamente en virtud de las leyes impositivas, la contribución que ellos más que nadie deben dar, y que están haciendo y permitiendo que la carga pública repose sobre los contribuyentes de menor posibilidad económica.

Es decir que cuando ponemos 25 millones de pesos viejos como el índice calificador del hecho que vamos a castigar, estamos refiriéndonos a esas grandes empresas y a esos grandes capitales que tienen, dentro de un concepto de solidaridad social, la mayor obligación de contribuir al sostenimiento de la cosa pública, que es, después de todo, la manera como se satisfacen las necesidades de todo un pueblo y de todo un país.

No he encontrado, en mis reflexiones sobre el tema, una manera de fijar un monto mejor que ésta que la comisión ha puesto. Y digo que es mejor que aquello de la «significativa magnitud» porque esa expresión dejaba una imprecisión muy grande en una ley, ley que aunque es de penalidad fiscal, en el fondo debe considerarse como ley de tipo y de corte penal en cuanto a la precisión de sus términos.

No participo, sin embargo, de las observaciones del señor senador de la Rúa en cuanto a modificar la calificación del responsable por deuda propia o ajena, que está bastante bien caracterizada. La ley fiscal indica quién debe pagar la contribución propia y quién puede pagar la contribución ajena.

Improvisando un poco frente a la inquietud del señor senador Cerro, indico, por ejemplo, que el administrador de una sucesión que está sometida al pago de un tributo nacional es el responsable de pagarlo efectivamente, como el tutor o el curador que indica el señor senador Caro. De manera que eso va a estar perfecta-

mente caracterizado. La expresión «ocultamiento malicioso» reconozco que es un poco redundante, toda vez que el núcleo del hecho, de la figura, está dado por el ardid, el engaño, que es la figura más comprensiva y sobre la cual efectivamente la jurisprudencia ha fijado una interpretación admitida ya en forma pacífica y que permite al juzgador encuadrar perfectamente las situaciones que en cada caso se presentan. Sin embargo, creo que no está de más que lo dejemos. Podrá decirse que hemos incurrido en un defecto de técnica hablando de ardid o engaño y hablando también de ocultamiento malicioso, que vendría a ser una de sus formas; pero resulta que es la forma más común y no estaría mal que nosotros digamos que incurre en el hecho punible el que hace ocultamiento malicioso para evadir o tratar de evadir, sin perjuicio de que esto esté comprendido en cualquier forma de ardid o engaño.

Estimo que queda perfectamente establecido como norma de interpretación, a través de lo que se ha dicho en el recinto, que los que están comprendidos en la ley son los atributos a cargo de la Dirección General Impositiva, es decir, los que caen dentro de su propia jurisdicción y no aquellos que por alguna eventualidad vengan a ser recaudados por esa dirección.

No concuerdo tampoco con el señor senador de la Rúa, y me interesa que quede establecido el sentido del último párrafo del artículo 1º cuando habla de la reincidencia. El límite mínimo, es decir, los 25 millones de pesos moneda nacional, según este texto, no van a tener aplicación en el caso de reincidencia. Interpreto que la situación concreta va a ser la siguiente: un evasor de 25 millones por lo menos, que resulte condenado y que, por segunda vez, cometa una omisión susceptible de considerarse evasión fiscal, en esta oportunidad, no se tendrá en cuenta si es por 4, 10 o 25 millones, porque se trata de una reincidencia. La ley considera con bastante rigor esta situación, pero determinado por el hecho de que esto está dirigido a impedir la evasión fiscal de los grandes intereses económicos, fija un criterio que puede calificarse de riguroso, pero no de injusto, toda vez que se atiende a la finalidad y al propósito de la ley.

Me gustaría saber si esta interpretación que yo doy del caso de reincidencia, de acuerdo al texto de la ley, es compartida por el señor senador de la Rúa, por cuya opinión profesional tengo gran respeto.

Sr. de la Rúa. — No soy especialista ni mucho menos en cuestiones impositivas, señor senador. Simplemente como se trata de un asunto de la comisión que integro he estudiado cuanto he podido. Puedo decirle que quizá en la aplicación práctica no resulte una contradicción, entendiéndose que en el caso de reincidencia no rige el límite cuantitativo. Quedará en todo caso para los teóricos la cuestión técnica y la crítica consiguiente de que el límite cuantitativo no esté

definiendo la figura penal sino constituyendo una causa de eximición de prisión. Pienso que lealmente interpretada la norma podrán evitarse mayores problemas. En este sentido, serán útiles las reflexiones que se formulan para una interpretación más adecuada del texto.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Con relación a la tentativa, efectivamente está contemplada en el artículo 15 del proyecto, pero también supongo que el propósito de la comisión, que nos ha explicado el señor senador Díaz Bialek, no desfigura el caso porque es una especie de notificación, urbi et orbe, de que no solamente el que evade, sino el que intenta evadir, sin admitir que se entre a discutir la aplicación o no de la norma correspondiente del Código Penal, va a estar alcanzado por las sanciones de la ley. Y me parece que la explicación es suficiente y el propósito de la ley es coherente en este punto.

Sr. Pugliese. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

Sr. Pugliese. — Señor presidente: por supuesto, no pensaba intervenir en este debate por todas las manifestaciones que han hecho los señores senadores y por el tiempo que llevamos considerando el asunto. Pero es una cuestión demasiado importante como para que nos fijemos en el reloj.

Mi preocupación, en el artículo 1º es que se dé una explicación a la Cámara con respecto a la cifra elegida que, de acuerdo con lo adelantado por el señor miembro informante, se ha tomado en virtud del asesoramiento técnico de la Dirección General Impositiva. Con respecto a esa cifra me preocupa si se han tenido en cuenta todos los impuestos a cargo de la Dirección General Impositiva o algunos de ellos. De acuerdo con los fundamentos que dio el señor miembro informante, que yo seguí con mucha atención, los mismos hacían una referencia reiterada al pequeño evasor o pequeño contribuyente, que sería como un sinónimo de pueblo. Y por lo menos en uno de los impuestos más importantes que se evade, el impuesto a los réditos, está demostrado que la cuarta categoría no puede ser evasora, a pesar de la buena voluntad de todos los gobiernos, por la sencilla razón de que es la que paga sin posibilidad de eludir, aunque tuviera la intención de hacerlo, porque se le quita en la propia fuente. Si se evade, lo hace el agente de retención.

Esta categoría representa un porcentaje bastante elevado de ese impuesto. Desde luego que, en general, no comparto las objeciones del señor senador Grubisich en lo que se refiere al carácter represivo de la ley, porque para mí este aspecto no puede ser analizado aisladamente. Forma parte de una serie de medidas que deben adoptar la Dirección General Impositiva.

sitiva y los gobiernos, que determinan la conducta de esta dirección, que es previa. Por supuesto que la sanción de esta ley significará que no habrá más blanqueos en el país, porque un blanqueo supondrá la confesión lisa y llana del delito que esta ley recrimina. Desde ese punto de vista ya sería suficiente para apoyar la ley.

En segundo término no habrá moratorias sucesivas o reiteradas para regularización. Es cierto que las leyes impositivas son o han sido injustas; pero también es cierto que éste es un argumento que se ha usado en forma remanida para justificar no sólo la evasión sino una capitalización gratuita para producir pautas de consumo que en definitiva, si no dijéramos grandilocuentemente que han atentado contra los intereses del país, han deformado la posibilidad de una conducción ordenada de la economía.

De manera que estoy de acuerdo en general, y por eso iría un poco más allá. Es importante que aclaremos por qué hemos puesto esta suma. La distinción de pequeños y grandes evasores es también un criterio subjetivo que se objetiva en una cifra. Pero la cifra surge de algo. El señor miembro informante dijo que la dirección conoce a los grandes evasores. En la Cámara, al tratarse los proyectos de regularización impositiva, se señalaron las cifras que se blanquearon. Pero esto no quiere decir que todos los evasores hayan blanqueado o regularizado, porque en este nivel que estamos considerando puede ser que no haya habido gran interés. Además, se trata de un nivel que pudo no quedar en negro en base a consumos mayores.

De cualquier manera esto no significa que no exista evasión.

No sé si en ese porcentaje de evasión de que se habla, de impuestos de la Dirección General Impositiva, el mismo está dado exclusivamente por los grandes evasores. Yo discrepo de alguna manera, no en la intención de los señores legisladores que han traído el proyecto, sino en el concepto de que aquí se persigue la represión del gran evasor. Discrepo con el sentido de que aquí lo que se persigue es la represión de la evasión. Lo que le interesa al Estado es que se cumpla correctamente con la obligación fiscal, de manera tal que se puedan afrontar con dinero genuino los gastos que el Estado debe realizar. De tal manera que, como acá se ha dicho con justeza, la inflación no la paguen todos por la mala conducta fiscal de unos pocos.

Me interesaría saber, y supongo que también al país, si la comisión tiene estos antecedentes, cuál ha sido la razón de suponer que esta cifra caracteriza a un pequeño evasor que puede ser que sea así comparada con un gran evasor que blanquee cincuenta mil millones de pesos. ¿Cuál es la pauta comparativa que ha sido tenida en cuenta para fijar esta cifra?

Sr. Díaz Biale. — La pauta comparativa ha sido proporcionada por la Dirección General Impositiva informando quiénes son los grandes contribuyentes, y se ha entendido que los contribuyentes de sumas superiores son los que tienen un capital de quinientos millones de pesos. Teníamos que ponerle un límite. El número de contribuyentes mayores de quinientos millones de pesos es muy limitado...

Sr. Pugliese. — ¿Me permite, señor senador?

Sr. Díaz Biale. — Cómo no.

Sr. Pugliese. — La Dirección General Impositiva habla de contribuyentes porque no puede hablar de evasores, porque si los conociera pasarían a ser contribuyentes. Quería saber la pauta que tiene la dirección para un contribuyente que paga.

Sr. Díaz Biale. — Quinientos millones de pesos, porque se ha calculado que si evade veinticinco millones de pesos tiene aproximadamente una renta de cincuenta mil pesos, que corresponden a un capital de quinientos millones, aproximadamente.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador de la Rúa.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: quería aclarar que el objetivo de esta ley es establecer la pena de prisión para el fraude fiscal sin perjuicio de que correspondan también las multas fiscales por la evasión, inclusive por la de cualquier tipo, grande o chica, fraudulenta o no fraudulenta, que es reprimida con la multa fiscal, pero la pena de prisión la reservamos para el gran fraude fiscal. Esta es la especificidad de la ley.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Continúa la consideración en particular.

Sr. Grubisich. — El señor senador Pugliese ha manifestado en su intervención que no comparte la opinión vertida en mi anterior exposición en el sentido de que ésta es una ley represiva. Entonces no entiendo su criterio.

Sr. Pugliese. — No comparto su opinión, señor senador, en contra de tal afirmación. No he dicho que ésta no es una ley represiva, porque en realidad lo es.

Sr. Grubisich. — En cuanto a ese aspecto, me he referido al sistema de la represión y a los objetivos que debe buscar la ley: si era buscar la evasión, sostengo que si ya se ha ensayado el sistema represivo y en los hechos se ha demostrado que era ineficiente para evitarla, ¿qué nos hace suponer que con esta nueva ley se van a conseguir esos objetivos?

Sr. Presidente (García, A. A.). — La Presidencia va a solicitar al señor miembro informante de la mayoría el criterio con respecto a la solicitud del señor senador de la Rúa. ¿La comisión mantiene el texto tal como está redactado?

Sr. Díaz Biale. — Sí, señor presidente, lo mantiene.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Se va a votar el artículo 1º propuesto por la mayoría de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se vota y aprueba el artículo 2º.

—Se lee el artículo 3º.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. de la Rúa. — Simplemente quiero reiterar la observación de que se suprima la ejemplificación que contiene este artículo aumentando la pena en la figura del artículo 1º. Insisto en la observación formulada aunque considero que por el sentido en que ha sido votado el artículo 1º esta observación será desechada, cosa que lamento.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º en la forma en que ha sido redactado por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 4º.

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — A pesar de la observación del señor senador de la Rúa, con relación al artículo 164 del Código Penal, relativo a la pena de extorsión, y que podría considerárselo suficiente para resolver la situación aquí planteada, yo considero conveniente la incorporación de un artículo especial, porque de esa manera la ley penal substitutiva va a eliminar cualquier duda respecto de si el código es aplicable o no a estos casos de extorsión particulares sobre los que nosotros estamos legislando. Que quede aclarado que no es el código sino una ley penal especial la que legisla sobre estos delitos, aunque sea redundante, y también porque se refiere a situaciones que no están descritas en el Código Penal. Si se consultan los textos, esto se advertiría.

La pena agravada va a jugar como una clara notificación a los funcionarios, porque es muy grave, muy peligrosa la actuación de quienes quieren desviarse del recto camino y pretenden extorsionar a los contribuyentes con la amenaza de aplicación de esta ley. Este es el sentido que yo le doy a la redacción de este artículo, y por lo cual me parece que lo votemos como está redactado.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. de la Rúa. — Yo estoy de acuerdo en que la extorsión de este tipo debe ser reprimida, aun con la penalidad agravada que aquí se pre-

vé. No se justifica repetir la figura del Código Penal y por eso sugerí un texto como el siguiente: «Cuando se cometa el delito de extorsión previsto en el artículo 164 del Código Penal mediante amenazas de imputar a otro alguno de los delitos sancionados por la presente ley, la pena será de tres a nueve años de prisión. Si el autor fuera funcionario público, la pena será de cuatro a diez años de prisión». Reconozco que es una observación formal y secundaria.

Sr. Díaz Biale. — La comisión mantiene la redacción tal como está, señor senador.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Se va a votar el artículo 4º tal como fue propuesto por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 5º.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: entiendo que este artículo debería suprimirse y aplicarse directamente las reglas de la participación. Pienso que la cuestión es aquí un poco más grave porque al hacerse una enumeración de quienes comparten también la responsabilidad penal, estamos dando por vía de esa enumeración un sentido limitativo a la participación penal. En este aspecto, habría más amplitud si dejáramos la cuestión a la parte general del Código Penal.

Por otro lado, resulta confusa la redacción, sobre todo en donde se dice: «representantes de aquellos que hayan intervenido en la comisión del hecho de que se trate...». Si este artículo se lee dos veces puede advertirse que la interpretación puede ser diversa en cada caso. Por eso, reitero la observación de que este artículo se suprima y se deje la cuestión de la participación a la norma general del Código Penal que es lo más correcto.

Sr. Presidente (García, A. A.). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Díaz Biale. — No, señor presidente. La comisión va a mantener la redacción del artículo 5º y reitero las expresiones del señor senador Martiarena y las mías, en el sentido de que estamos aquí frente a una ley nueva de carácter tributario y no específicamente del Código Penal que reprime el delito común.

La redacción de la ley, y todo lo que podría aparecer como sobreabundante porque podría remitirse al Código Penal, entendemos que está bien porque así los contribuyentes saben a qué atenerse.

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — El artículo 5º se refiere al famoso problema discutido por los penalistas sobre si la sanción penal puede recaer con relación a quienes dirigen e integran una persona

de existencia ideal en cuyo beneficio se comete el delito. Como esto no es ley del Código Penal queda superado el problema, y la ley les atribuye expresamente responsabilidades a los representantes de la persona de existencia ideal en cuyo beneficio se comete el delito. Es decir que si una sociedad anónima dirigida por un directorio o por un gerente evade más de veinticinco millones de pesos, la responsabilidad fiscal recaerá sobre la entidad ideal. Pero la responsabilidad penal va a recaer, sin ninguna duda, sobre los directores, administradores, gerentes, mandatarios o gestores.

Sr. de la Rúa. — Justamente, la interpretación que hace el señor senador es la que yo señalo como peligrosísima consecuencia posible de este artículo, porque si se aplicara la interpretación que usted formula, no digamos a un director, a un gerente, a un mandatario, por el solo hecho de serlo, se aplicará pena de prisión sin haber participado en la evasión fiscal.

Para evitar una errónea interpretación sugiero que coloque una coma después del pronombre «aquéllos», es decir, que diría «...gerentes, mandatarios, gestores o representantes de aquéllos, ...» porque de lo contrario, si no se agrega la coma los mencionados serán responsables aunque no hayan participado del hecho, y aunque lo ignoren.

Sr. Martiarena. — Es un evidente error de la ley. Ese es el sentido de «aquellos que hayan intervenido en la comisión del delito».

Sr. de la Rúa. — Si han intervenido en la comisión del delito son responsables de acuerdo con el artículo 42 del Código Penal. Al enumerar qué tipo de representantes son responsables, hay otros que pueden quedar afuera. Para no limitarlos pido que nos remitamos al Código Penal.

Sr. Martiarena. — Me parece que la aclaración de la coma es aceptable y fija el criterio de la ley. La otra aclaración no, porque no vamos a hacer regir las normas generales de la participación penal, sino estas especiales que le estamos dando a esta ley especial.

Sr. de la Rúa. — Digamos que la enumeración no es limitativa.

Sr. Martiarena. — Es bastante amplia, además. Cuando hablamos de directores, administradores, gerentes, mandatarios, gestores o representantes de aquellos que hayan intervenido en la comisión del hecho, es la gente que tiene la responsabilidad de la persona jurídica.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Ruego a los señores senadores se sirvan no dialogar.

La Presidencia le ruega al señor miembro informante del dictamen de la mayoría se sirva hacer saber al cuerpo cuál es la modificación que acepta al artículo 59.

Sr. Díaz Biale. — Estamos de acuerdo con el agregado de la coma, luego de la palabra «aquellos».

Sr. Presidente (García, A. A.). — Se va a votar el artículo 59 con la redacción que figura en el orden del día y el agregado de una coma propuesto por el señor senador de la Rúa y aceptado por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 6º.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

La he solicitado para proponer un agregado al texto de este artículo, para hacerlo compatible con la pena de inhabilitación prescrita en el Código Penal. Y es el siguiente: «Además de las penas previstas por los delitos de la presente ley, el actor participe sufrirá inhabilitación especial por doble tiempo de la condena cuando obrare en el ejercicio de un empleo, cargo o profesión».

Sr. Díaz Biale. — La comisión mantiene el texto del despacho.

Sr. Grubisich. — Pido la palabra.

Antes de que se agote el tratamiento en particular del capítulo que se refiere a las penas y los responsables, quisiera que la comisión aclare si cuando se establece la suma de doscientos cincuenta mil pesos por defraudación, se refiere a la cometida dentro de un ejercicio anual; o si, por el contrario, tiene relación con el momento en que la Dirección General Impositiva descubre que uno de los contribuyentes ha evadido esa suma, sin tener en cuenta el tiempo en el cual la evasión se produce.

Sr. Díaz Biale. — El artículo 1º del dictamen menciona la suma de doscientos cincuenta mil pesos anuales, señor senador.

Sr. Grubisich. — No encontraba la referencia en cuanto a que fueran anuales. De acuerdo, señor senador.

Sr. Pugliese. — ¿Me permite una simple aclaración, señor miembro informante? Cuando me refería a los doscientos cincuenta mil pesos olvidé una pregunta, a mi juicio importante. El proyecto habla de un monto superior a doscientos cincuenta mil pesos anuales que se intente evadir. ¿Esto se refiere al monto de la evasión o al monto total de lo que le correspondería pagar al contribuyente?

Sr. Díaz Biale. — Se refiere al monto de la evasión.

Sr. Pugliese. — ¿No el monto de lo que le corresponde pagar? Podría darse el caso de un gran contribuyente que evade veinticuatro millones y no incurre en ningún delito.

Sr. de la Rúa. — Tiene la multa fiscal.

Sr. Díaz Biale. — Se le aplica la sanción que le impone la ley impositiva. Para tipificar el delito, de algún modo lo hemos explicado y hemos puesto hasta doscientos cincuenta mil pesos; es decir, de los que tiene que pagar.

Sr. Presidente (García, A. A.). — ¿Está satisfecho, senador Pugliese?

Sr. Pugliese. — La interpretación es clara, pero no me satisface. Preferiría que hubiera sido el monto total.

Sr. Martiarena. — ¿Me permite, señor senador Pugliese? Entiendo que es por un monto superior a doscientos cincuenta mil pesos de impuesto, porque se refiere la ley a «uno o más tributos a cargo de la Dirección General Impositiva». Los tributos tienen relación con el impuesto, no con la multa.

Sr. Pugliese. — El artículo 19 habla de tributos a cargo de la Dirección General Impositiva, no los de aduana.

Sr. Díaz Biale. — Los de aduana, no.

Sr. Pugliese. — Pero la evasión está limitada a 25 millones de pesos. Es decir que si este señor tuviera que pagar 100 millones y hubiera pagado 75 no comete delito por los otros 25. Acá se ha hablado de pequeño y gran evasor, y yo creo que con este texto uno que evade 25 millones de pesos no comete delito.

Si ésta es la interpretación no me opongo. Pero no lo fundamentamos en los derechos del pueblo, porque tenemos que hacerlo de alguna manera. Si el límite es la capacidad contributiva anual de un contribuyente...

Sr. Díaz Biale. — Hablamos de lo que evade.

Sr. Pugliese. — Pero ese señor puede eludir 25 millones, y pagar 75 millones de los 100 millones. Es decir que si evade solamente 25 millones no incurrirá en delito.

Sr. Díaz Biale. — Sí, incurrir.

Sr. Martiarena. — Está claro, señor senador.

Sr. Presidente (García, A. A.). — La Presidencia ruega a los señores senadores que la discusión se desarrolle en orden.

El señor senador Pugliese ha solicitado una aclaración. Tiene la palabra el señor Díaz Biale para responder.

Sr. Díaz Biale. — En síntesis, señor senador Pugliese, usted pregunta si está comprendido o no si debiendo pagar 100 millones paga 75.

Sr. Pugliese. — Así es.

Sr. Díaz Biale. — Evidentemente lo está, porque ha evadido 25 millones. Habla de evadir total o parcialmente.

Sr. Pugliese. — Yo hablo del que evade menos de 25 millones.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: para aclarar al señor senador Pugliese quisiera decir que en realidad se trata de uno de esos casos en que hay que optar por una solución o por otra. Todos sabemos que un menor de veinte años tiene capacidad de discernimiento casi igual a la de otro de veintiuno. Pero la ley le asigna esa capacidad cuando cumple la edad establecida y no un día antes. Este es el sentido de la solución. Acá lo importante es por qué se fijan 25 millones y no más o menos.

Sr. Pugliese. — Quisiera aclararle al señor senador de la Rúa que yo puedo discurrir en cuanto a la diferencia que hay entre 250.000 y 249.999 pesos. No es eso lo que he dicho. Me he referido a

si lo que se incrimina es la evasión superior a 250.000 pesos ley o si éstos representan el monto total del impuesto que le corresponde abonar. Me han dicho claramente que no y yo sostengo que esto no discrimina entre pequeño y gran evasor. A este último la ley le permite, sin incurrir en delito penal, evadir hasta 25 millones de pesos.

Sr. Presidente (García, A. A.). — La Presidencia hace presente a los señores senadores que ese artículo ha sido votado y aprobado. Para tratarlo nuevamente hay que votar su reconsideración.

Sr. Pugliese. — Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, la hubiera pedido.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Se va a votar el artículo 69 tal como viene en el dictamen de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 7º.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. de la Rúa. — Señor presidente: pienso que toda la regulación de derecho procesal que contiene el artículo debe suprimirse, salvo en lo que se refiere a la competencia, y reemplazarse por una norma que diga así: «Para la persecución de los delitos reprimidos por la presente ley será aplicable el Código de Procedimientos en materia penal, actuando como funcionarios de prevención los que integran el organismo competente de la Dirección General Impositiva, con las mismas facultades y obligaciones determinadas para la policía en aquella ley».

Esta es la solución que propugno, porque evitaría la enumeración minuciosa que se hace en este artículo, y que crea problemas tales como los del inciso b), que ya he señalado, en tanto puede configurar un modo de obligar a declarar contra sí mismo, o el inconveniente que ahora advierto que puede surgir del inciso d). En efecto, en este inciso se exige la orden judicial para la detención de personas y para proceder a allanamientos; pero el texto alude también a registros o inspecciones de oficinas, libros, papeles, etcétera, y ese tipo de registros es común que los haga la Dirección General Impositiva. Para lo que debe exigirse la orden judicial es para la detención o el allanamiento del domicilio.

Nada más, señor presidente.

Sr. Díaz Biale. — No he comprendido acabadamente el planteo que formula el señor senador de la Rúa, y le agradecería que me lo aclarara.

Sr. de la Rúa. — Ocurre que en el curso de la investigación de estos delitos, se posibilita exigir de los contribuyentes la presentación de todos los comprobantes y justificativos que se refieran a los hechos motivo del sumario. Esto

está bien cuando se trata de determinar el monto imponible, pero en la investigación del delito puede configurar un modo de obligar a declarar contra sí mismo, que se suministre la prueba que conduce a la propia condena. Esto con referencia al inciso b). Y en cuanto al inciso d), pienso que la orden judicial es para el allanamiento o la detención; y temo que por la redacción del inciso estemos limitando en realidad una actuación que, como expresé en la exposición en general, debe ser amplia por parte de la Dirección General Impositiva en cuanto hace al registro de libros y papeles que las empresas deben tener a disposición de esa dirección.

Sr. Díaz Bialek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. Díaz Bialek. — Aquí no se trata, en el inciso b), de una declaración contra sí mismo, sino de una justificación que el contribuyente debe tener si ha cumplido, la que debe exhibir. Es decir, si el contribuyente cumple, tendrá el recibo correspondiente de la Dirección General Impositiva por el que demostrará que ha oblado el impuesto, y para saber si lo ha pagado o no, siempre se requiere la exhibición del mismo.

Sr. de la Rúa. — ¿Me permite una interrupción, señor senador, con la venia de la Presidencia?

Sr. Díaz Bialek. — ¿Cómo no, señor senador!

Sr. de la Rúa. — Fijese, señor senador, que aquí se refiere a hechos motivos del sumario.

Sr. Díaz Bialek. — ... se va a referir a la exigencia del comprobante por lo que sea motivo de sumario, y no a lo que se ha puesto en duda.

Sr. Presidente (García A. A.). — ¿Significa, señor senador Díaz Bialek, que la comisión mantiene el artículo tal cual está redactado?

Sr. Díaz Bialek. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (García A. A.). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º tal como figura en el dictamen de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 8º.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. de la Rúa. — Simplemente quiero expresar que la observación que formulara a este artículo es que pareciera que deja al juez competente fuera del sumario mientras actúa la instancia administrativa, cosa que es incompatible con la potestad jurisdiccional. Por otra parte, parece dejar a criterio de la Dirección General Impositiva la decisión final sobre la causa, porque es el órgano administrativo el que inicia o no la denuncia o querrela ante el juez, y pareciera que solo cuando se inicia la denuncia o querrela el juez puede actuar.

Pienso que el juez tiene una potestad amplia y puede actuar desde el primer momento. Aquí

estamos en una materia penal fiscal, pero penal en definitiva, y no puede excluirse al juez por decisión del órgano administrativo.

Sr. Díaz Bialek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. Díaz Bialek. — La comisión va a mantener el texto del artículo 8º, señor presidente, porque creo evidente que el juez penal no podrá actuar si antes no se ha instruido sumario administrativo del cual puede resultar la comisión de un hecho delictuoso. Y acá el artículo 8º se refiere al caso de la tentativa en que ha sido instruido el sumario, porque en el caso de la evasión, artículo 10 última parte, vamos a modificar el texto del mismo, que dice así: «Cuando el delito imputado sea la evasión fiscal no se instruirá el procedimiento hasta que no exista la resolución final. Pero en el caso de la tentativa rige el artículo 8º».

Sr. Martiarena. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (García, A. A.). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Yo interpreto —para darle tranquilidad a los contribuyentes que van a estar sometidos al imperio de esta ley— que la actuación de los funcionarios de la Dirección General Impositiva no es substitutiva de la jurisdicción judicial, porque se habla del sumario de prevención administrativa, es decir, se realiza un sumario de prevención administrativa. Después de establecidas las circunstancias de la evasión por las características de ardid o engaño que hacen aplicable la ley represiva que estamos considerando, la autoridad administrativa, en definitiva, cuando estén reunidos los requisitos tipificados, la someterá al juez competente. Esto no significa, quiero que quede bien establecido, que ese sumario obligue al juez competente, ya que sus facultades de investigación serán plenas y se abrirá una verdadera instancia judicial, con todas las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio que ya marcan los códigos procesales. De lo contrario, estaríamos creando una anomalía muy grande y sometiendo a las personas al juzgamiento de un tribunal administrativo.

Sr. de la Rúa. — Eso está previsto en el inciso e) del artículo anterior, al decir que las actas «sean o no firmadas por el interesado, servirán de prueba en el juicio respectivo». Quiere decir que lo hecho en la instancia administrativa está teniendo eficacia en el proceso en sede judicial.

Y en el artículo 8º hay un juicio de valoración a cargo del organismo administrativo, cuando dice que «si de sus conclusiones resultare indicio vehemente o semiplena prueba de aquéllos, el director general o los funcionarios de la repartición que éste designe en cada caso iniciarán denuncia o querrela ante el juez competentes». El punto central de esta cuestión, en definitiva, es determinar quién efectúa esa valoración.

Sr. Díaz Biale. — Es el criterio administrativo en virtud del cual se promoverá la querella.

Sr. de la Rúa. — Yo me coloco en el punto de vista de la protección del imputado, pero también considero que no debe ser la Dirección General Impositiva la que tenga la última palabra para eximir de pena y de sanción a un representante de fraude fiscal.

Sr. Díaz Biale. — El artículo 9º dice que «el sumario administrativo labrado en las condiciones establecidas en esta ley constituirá la base del proceso judicial y se elevará al juez competente ante quien se formule la denuncia o querella».

— Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador José Antonio Allende.

Sr. Martiarena. — Me parece importante el diálogo, sobre todo para fijar estos conceptos que hacen a la defensa fundamental de los derechos de los ciudadanos. Es una preocupación que yo comparto con el señor senador.

Sr. de la Rúa. — Y también los derechos del Estado.

Sr. Martiarena. — Cuando dice que servirán de prueba en el juicio respectivo, el proyecto refiere ese valor al sumario administrativo de prevención, para que el funcionario actuante determine si ha llegado el momento de formular la denuncia o querella; no para el juzgamiento. En esto quiero insistir porque el juez no puede por esta ley sentirse obligado a admitir esa prueba sólo porque el sumario administrativo la tenga por válida.

Con estos conceptos me parece que garantizamos el debido proceso.

Sr. Presidente (Allende). — Se va a votar el artículo 8º.

— Se vota y resulta afirmativa.

— Se vota y aprueba sin observación el artículo 9º.

— Se lee el artículo 10.

Sr. Díaz Biale. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Díaz Biale. — Voy a proponer una modificación. En la parte final de este artículo 10 la comisión recomienda agregar la frase «cuando el delito imputado sea la evasión fiscal se hará la denuncia o querella pero no se iniciará el procedimiento hasta que no recaiga resolución final en sede administrativa».

Sr. de la Rúa. — La observación que había formulado a este artículo era totalmente secundaria porque pienso que el primer párrafo inte-

gro es innecesario. Evidentemente éstas no constituyen cuestiones prejudiciales, las que sólo existen cuando las establece expresamente la ley. Incluyendo la expresión no se pierde nada. Simplemente señalo que el texto es superabundante.

En cuanto a la última parte del artículo, creo que en la comisión habíamos llegado a una solución más cercana a la verdad que la que ahora se propone, porque el proyecto originario decía que «no se dictará sentencia» y le agregamos la palabra «condenatoria», con el objeto de que quien tuviese derecho a un sobreseimiento, que en definitiva es una sentencia liberadora, no se viera privado de ese derecho. Al modificar el texto, el señor miembro informante vuelve a aquel error que procuramos enmendar, porque hay una garantía constitucional por la cual todo ciudadano sometido a proceso tiene derecho a la sentencia. Una sentencia que libere o exima de prisión, como el sobreseimiento, no hay razón para dejar de dictarla porque la Dirección General Impositiva demore su investigación, que puede prolongarse indefinidamente.

Por esta razón se puso que no se dictará «sentencia condenatoria», lo cual permite dictar sobreseimiento o sentencia absolutoria.

Sr. Díaz Biale. — Precisamente la comisión ha querido evitar todos los inconvenientes que ocasiona al contribuyente que esté procesado no habiendo decisión por parte de la Dirección General Impositiva en el sentido de que existen indicios vehementes de la comisión de delito. La denuncia se hace, pero, mientras no haya resolución definitiva o la Dirección General Impositiva no diga que existe un acto de defraudación, el contribuyente no sufre los inconvenientes del proceso.

Sr. de la Rúa. — Creo que los resultados serán contrarios a lo que se propone.

Sr. Rodríguez. — ¿No puede llegar a hacerse una denuncia que después resulte falsa?

Sr. Díaz Biale. — Se presenta la denuncia.

Sr. Rodríguez. — El texto está bien como está. Si después se dicta la resolución, se ha hecho una denuncia.

Sr. Díaz Biale. — Pero no le ha causado ningún daño al denunciado porque no está procesado.

Sr. Rodríguez. — Pero el juez tiene obligación de investigarlo.

Sr. Díaz Biale. — El propósito de esta reforma era cuidar más la libertad personal, a fin de que no padezca los inconvenientes de un proceso, pero si se estima lo contrario no tengo inconveniente en mantener el texto del artículo 10.

Sr. Rodríguez. — Me parece que el texto del dictamen está bien.

Sr. Presidente (Allende). — Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 10 con la modificación propuesta por la comisión.

Sr. Pugliese. — ¿La comisión ha retirado la modificación propuesta?

Sr. Díaz Bialek. — Retiro la modificación.

Sr. Pugliese. — Cuando se dice «resolución firme en materia fiscal» no se refiere al sumario que ha hecho la investigación de este delito sino a la sanción administrativa que le corresponda.

Confieso que no conozco mucho de procedimiento. Me van a perdonar si digo algo que no corresponde. Pero el artículo 9º dice que «El sumario administrativo labrado en las condiciones establecidas» —el artículo 8º se refiere al sumario administrativo— «en esta ley constituirá la base del proceso judicial y se elevará al juez competente ante quien se formule la denuncia o querrela». Es decir, que se ha desprendido de este sumario en qué momento va a haber una resolución firme en materia fiscal o en una sede diferente al sumario administrativo que se ha hecho y que debe ser elevado.

Sr. Díaz Bialek. — Hay dos situaciones distintas: la del artículo 8º, que se refiere a la tentativa, y la del artículo 10, que se refiere al caso de la evasión.

En el caso de la tentativa puede iniciarse el sumario; en el caso de la evasión, ponemos que «... no se dictará sentencia condenatoria hasta que exista resolución firme en materia fiscal», con el objeto de evitar sentencias contradictorias, como podría ocurrir en el caso de que el juez penal dijera que lo absuelve y que en el sumario se dijera que ha cometido el hecho.

Sr. Pugliese. — Pero el artículo 9º dispone que para hacer la denuncia hay que elevar el sumario.

Sr. Díaz Bialek. — Lo que que ocurre es que el sumario administrativo después va al Tribunal Fiscal y puede llegar hasta la Corte Suprema. Por eso, en el caso de la tentativa se eleva directamente, mientras que en este otro caso la situación es distinta y se requiere la decisión definitiva.

Sr. Presidente (Allende). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 10 tal como figura en el despacho de la comisión, ya que se mantiene el mismo.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 11.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Entiendo que la competencia no puede fijarse «según fuere el domicilio fiscal de los infractores» como dice la ley, sino teniendo en cuenta el lugar de la comisión del hecho, pues éste es el principio que surge del artículo 102 de la Constitución Nacional.

Sr. Díaz Bialek. — La comisión acepta la modificación.

Sr. Presidente (Allende). — Considera la Presidencia que el señor senador por la Capital debería concretar la modificación que propone y que es aceptada por la comisión.

Sr. de la Rúa. — La modificación que propongo consiste en poner en la parte final después de «... Capital Federal...» en lugar de lo despachado por la comisión «y los jueces federales de sección en las provincias y territorios nacionales, según el lugar en que se hubiere cometido la infracción».

Sr. Presidente (Allende). — Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 11 con la modificación propuesta por el señor senador de la Rúa y aceptada por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 12, 13, 14 y 15.

—Se lee el artículo 16.

Sr. Díaz Bialek. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Díaz Bialek. — El artículo en consideración tiene un error material. Dice que «A los efectos de esta ley serán de aplicación las disposiciones del título IX del capítulo XIII del Código Penal». Debe decir título XI, capítulo XIII.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Pareciera que no nos entendemos con el señor miembro informante. Lo digo cordialmente. En los otros casos yo proponía que en lugar de repetir lo que ya estaba del Código Penal, hiciéramos una remisión. Aquí se da el caso exactamente opuesto, es decir, la comisión, o la mayoría de la comisión mejor dicho, remite a las disposiciones del Código Penal; en cambio mi propuesta es que aquí redactemos un artículo específico para contemplar el encubrimiento, texto que, además, debería estar en la primera parte de la ley, o sea en la parte general. Esto se debe a que hay algunas figuras previstas en el encubrimiento, según el Código Penal, que no resultarían aplicables a este caso. De manera que voy a proponer el siguiente texto, que es un poco más extenso que el de la comisión: «Será reprimido con prisión de 15 días a 2 años el que, sin promesa anterior a la infracción, después de la ejecución de ésta: a) ayudare a otro a eludir las investigaciones de la autoridad; b) procurare o ayudare a procurar a otro la desaparición, ocultación, destrucción o alteración de los rastros o pruebas de la infracción; c) ayudare a otro a asegurar el beneficio de la

infracción; d) asegurare en su propio provecho el beneficio de la infracción; e) omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo. Estarán sin embargo exentos de la pena que fija esta disposición: a) el cónyuge; b) los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; c) la persona unida al infractor por lazos íntimos, de amistad o gratitud, salvo el caso del inciso d) o cuando hubiere obrado por precio».

Esta es la proposición que formulo.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador Díaz Biale, miembro informante de la comisión.

Sr. Díaz Biale. — Debo aclarar que la inclusión del artículo 16 en la comisión fue realizada a pedido del propio señor senador de la Rúa, y por esta vez estimamos que no había inconveniente en hacer referencia al Código Penal. De modo que, en realidad, lo que propone el señor senador es una enumeración que está contenida en lo que él pidió en la comisión y fue aceptado. Por lo tanto, vamos a mantener el texto del artículo 16 con la corrección del título XI, del capítulo XIII del Código Penal.

Sr. de la Rúa. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Allende). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. de la Rúa. — Para una aclaración. Efectivamente señalé en la comisión que al sancionar esta disposición por medio de una ley especial y no por el Código Penal, como lo había hecho la Cámara de Diputados, la figura del encubrimiento no resultaba aplicable, a menos que aquí se incluyese una norma expresa. De manera que no pusimos de acuerdo en la necesidad de prever el encubrimiento y, es cierto, fue a iniciativa mía. La única discrepancia estuvo en cuanto a la forma. La mayoría optó por remitirse al Código Penal; yo había propuesto una norma expresa.

Queda aclarada así la cuestión. No es que yo traiga a este debate un planteamiento diverso al que formulara en la comisión...

Sr. Díaz Biale. — Así es, señor senador.

Sr. de la Rúa. — ...sino que, leal y consecuentemente con lo que había propuesto, reitero en su alcance, incluso formal, la sugerencia que había formulado.

Sr. Presidente (Allende). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 16 con la modificación aceptada por la comisión, en cuanto a la referencia al número del título del Código Penal. En lugar de título IX es título XI.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 17.

Sr. de la Rúa. — Mi oposición se refiere al segundo párrafo de este artículo. Creo que el Congreso, y más tratándose de una ley penal,

debe sancionarla sin hacer depender la norma de la voluntad de otro poder. No puede derivarse al Poder Ejecutivo la puesta en vigencia de una ley de este tipo. Sentaríamos un precedente inexplicable.

Sr. Presidente (Allende). — ¿Propone alguna modificación el señor senador?

Sr. de la Rúa. — Propongo que se suprima el segundo párrafo del artículo.

Sr. Presidente (Allende). — ¿Acepta la comisión?

Sr. Díaz Biale. — La comisión va a mantener el despacho.

Sr. Presidente (Allende). — Se va a votar el artículo 17 propuesto por la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

—El artículo 18 es de forma.

Sr. Presidente (Allende). — Queda aprobado el proyecto. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

25

DELITOS CONTRA EL REGIMEN DE INVERSIONES EXTRANJERAS

Sr. Presidente (Allende). — Corresponde considerar el punto III del orden del día número 89: dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley de los señores senadores Díaz Biale y Frois sobre delitos contra el régimen de inversiones extranjeras.

Por Secretaría se dará lectura al dictamen de la comisión.

Sr. Secretario (Cantoni). — (Leyendo):

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley presentado por los señores senadores doctor Alejandro Díaz Biale y Domingo Andrés Frois sobre delitos contra el régimen de inversiones extranjeras; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del proyecto de ley en la siguiente forma:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Sufrirá pena de prisión de dos a ocho años, el que deliberadamente realice cualquier acto o maniobra para disimular el carácter extranjero de una inversión propia o